

CUADERNOS INTERNACIONALES

MAYO 1991

Nº 16

**ESCUELA SINDICAL
PARA
AMERICA LATINA:**

Intervenciones

Murcia, septiembre de 1990

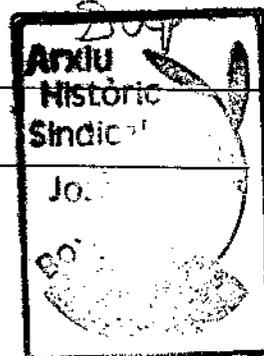


FONS: ARXIU
HISTÒRIC CONC

confederación sindical de comisiones obreras

Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos - CES





INDICE

INTRODUCCION	3
ECUADOR	5
CUBA	9
COSTA RICA	13
BOLIVIA	17
GUATEMALA	21
HONDURAS	25
PARAGUAY	29
PERU	31
URUGUAY	33
VENEZUELA	37
NICARAGUA	39
BRASIL	43
COLOMBIA	49



INTRODUCCION

DEL 10 al 21 de Septiembre del año pasado, la Fundación Paz y Solidaridad organizó en Murcia la Primera Escuela Latinoamericana de Formación Sindical. Al encuentro concurren delegados enviados por catorce organizaciones pertenecientes a trece países de la región.

Problemas de urgente resolución han impedido editar las intervenciones de los representantes de cada uno de los países hasta el momento. Su importancia y su actualidad, sin embargo, no han disminuido con los meses transcurridos.

Los últimos y vertiginosos acontecimientos en el escenario mundial han tenido, entre sus múltiples consecuencias, una particularmente negativa: como el ex-presidente Arias subrayaba hace poco "America Latina ya no está en la agenda internacional". Eso significa que la opinión internacional, absorbida por la versión televisiva de los acontecimientos del Oriente Medio, de Albania o de los países bálticos, ha dejado de prestar atención a un continente donde, sin embargo, las consecuencias del Nuevo Orden Internacional son ya viejas: dependencia, recesión, deterioro, epidemias, conflictos armados son algunos de los términos que reiteradamente aparecen en los informes del año sin que ello produzca mayores repercusiones.

Esperamos que las descripciones directas que aquí recogemos sirvan, por lo menos, para mantener viva nuestra atención sobre una zona del mundo que parece hundirse poco a poco entre la indiferencia y el olvido. ■

ECUADOR

Interviene: Eduardo Zurita Gil
Sindicato: C.T.E.

ECUADOR

CAPITAL	QUITO
SUPERFICIE EN KM ²	283.561
● Demografía	
POBLACION TOTAL	10.49 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.8 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	63 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	11.272
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	1.075
TASA DE INFLACION	75.6 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL. DOLARES)	11.7
GASTOS EN EDUCACION	3.5 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	1.8 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	17.6 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	74.7 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	25.8 POR 100

CREO que es muy importante que nosotros al iniciar esta intervención, expresemos que desde el punto de vista de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, la CTE, hemos destacado de modo muy particular, la iniciativa que ha tenido CC.OO. al organizar esta primera Escuela Latinoamericana de Formación Sindical. Y siendo CC.OO. la organización fraterna que nos brinda la oportunidad, aquí en España y en esta ciudad que ha dado un marco de alegría y de calor a este evento, la oportunidad de hacer intercambios de opiniones, de analizar la realidad de cada uno de nuestros países, y de nuestra gran nación Latinoamericana. Pero más allá del hecho formal del evento, creo que es importante las conclusiones que podemos sacar de él. Que este sea quizás, no el primero, pero sí un paso importante para poder preparar mejor a nuestras organizaciones a un futuro que cada vez se vuelve más dramático y difícil en Latinoamérica y en el mundo.

Hemos señalado que quizás el eje más importante en la proyección del movimiento obrero es la identidad Internacional de clases. Así lo percibió Carlos Marx y lo expresó contundentemente en la consigna "proletarios de todos los países del mundo unidos". Pero no solamente la necesidad histórica de establecer y profundizar una alianza clasista internacional. En un mundo como el actual interdependiente, que cada día rompe las barreras del espacio y el tiempo a través de la comunicación y la informática, la necesidad de crear espacios de comunicación entre países que comparten historias y realidades comunes, son imperativos que han exigido establecer una política en el frente internacional. Una política acorde a las necesidades actuales y que significa presencia en los foros internacionales en especial aquellos vinculados con la realidad de los trabajadores.

Nos parece importante que al iniciar este foro, que se empiecen a establecer ciertos objetivos. En esta mañana se mencionaba por ejemplo que, el objetivo de esta Escuela no era solamente el hacer un diagnóstico de lo que vive cada uno de nuestros países, porque en realidad existen documentaciones en donde se recogen las más recientes experiencias y los acontecimientos más importantes que han tenido incidencia en el desarrollo del movimiento obrero ecuatoriano, latinoamericano y quizás uno que otro aspecto a nivel de todo el mundo.

Lo más importante es primero establecer un mecanismo de continuidad a este tipo de eventos.

En segundo lugar señalar cuales deberían ser las prioridades que deben perseguir estos encuentros y estos seminarios. No creo que sea solamente el hecho de intercambiar información y conocimientos. Me parece que el desafío del momento actual es el buscar vínculos de permanente unidad y de profundizar en la integración de nuestros pueblos. Creo que España es un buen escenario porque a España nos ligan una serie de antecedentes históricos. Y si bien en estos momentos se prepara desde el punto de vista especialmente indígena en Latinoamérica, un proceso reivindicatorio de lo que han significado 500 años de opresión y que no han sido 500 años de opresión sólo de la corona española y que nos debería llamar la atención de que en este momento nuestro principal enemigo no es precisamente el reino español. Nuestro principal enemigo, enemigo de clase, a nivel interno y externo en nuestros países es el imperialismo norteamericano. Creo que al respecto de los trabajadores de España, si bien con características y circunstancias diferentes, pero también el imperialismo norteamericano tiene una repercusión. Creemos también que la economía española depende de los designios del Fondo Monetario Internacional. Depende de las políticas implementadas por el

imperialismo norteamericano y por los grandes centros de poder financiero y comercial en el mundo. De tal manera que tenemos que empezar a buscar realidades comunes. Realidades comunes que nos permitan hacer un frente común, porque creo que eso es lo que más les puede interesar a nuestros trabajadores y a nuestros pueblos. A nosotros nos vincula históricamente con España, a los latinoamericanos, no solamente puntos de convergencia histórica sino también una mixtura, una mezcla de culturas, costumbres, idioma, religión; y eso son hechos y realidades que no podemos desconocer. Pienso que hay que revalorar en una óptica diferente que no puede ser tampoco revanchista; quizás revanchista sí a los procedimientos, quizás no revanchista sino reivindicatoria, a los sistemas injustos de opresión pero que son sistemas que todavía los trabajadores españoles también tienen que reivindicarlos, porque también éstos son hoy en día explotados. De tal manera que creo que esos deben ser puntos de análisis, punto de origen del análisis.

En la realidad actual los trabajadores y el pueblo del Ecuador viven precisamente los defectos de una política implementada por el gobierno de los EE.UU. a través y en forma directa de los mecanismos financieros. Todos conocemos lo que significa la Deuda Externa y todos vivimos las consecuencias de esa trampa inventada e impuesta por los centros financieros del capitalismo mundial.

Nuestros pueblos están pagando de manera injusta ese dogal impuesto por el imperialismo norteamericano. Todos conocemos también lo que significa el sometimiento a un injusto intercambio comercial al que vivimos sometidos los países más pobres, los países productores de materias primas.

Posiblemente son los dos grandes temas que deben atraer nuestra atención respecto de la realidad nacional e internacional que viven nuestros países. Dentro de ese mismo proyecto que comienza con la trampa de la Deuda Externa y la imposición de un injusto orden económico internacional, hoy se implementan nuevas formas de explotación de nuestros recursos naturales y humanos.

En nuestro país se acaba de editar una Ley que es un paquete de leyes que van desde la modificación sustancial de derechos laborales consagrados no solamente en el código del trabajo sino en la Constitución de la República. Sin haber cambiado los principios constitucionales se dicta la ley; sin haber previas reformas constitucionales, se han dictado estas leyes, gracias a que el gobierno mantenía una mayoría parlamentaria, una mayoría que en términos formales ha variado su composición después del proceso electoral del 17 de julio anterior, pero que sigue teniendo una coincidencia y sigue existiendo una mayoría que expresa los mismos intereses de la clase dominante en nuestro país, lo cual significa representar a las fuerzas de la oligarquía (el General Torrijos decía "decir oligarquía e imperialismo es una repetición, porque en el fondo son lo mismo"). Entonces la clase dominante en nuestro país tiene la coincidencia con los intereses tanto del imperialismo norteamericano cuanto de la oligarquía criolla; y seguirán teniendo para efectos de salvaguardar este nuevo proyecto político y sus propios intereses, seguirán teniendo mayoría en el interior de nuestro Parlamento y en nuestro gobierno en su conjunto.

En esta ley que se acaba de editar, se reforma y se atenta a los principios fundamentales en las relaciones de trabajo, de los trabajadores ecuatorianos, se reforman leyes aduaneras, se reforman leyes que tienen que ver con la concesión de créditos. Es decir, un sinnúmero de reformas de carácter legal que buscan crear las condiciones para comenzar en nuestro país una experiencia que ya han vivido otros países de América Latina, y otras partes del mundo, que es el sistema llamado de la producción de MAQUILA o el MAQUILAJE.

Para nosotros como organizaciones de trabajadores en el Ecuador, sin lugar a dudas, fue una sorpresa pero el haber conocido experiencias de compañeros de otros países, nos ha hecho que, a pasos acelerados, tratemos de ponernos al día para, de alguna manera, dar respuestas desde los intereses de clase a lo que significa esta nueva forma de explotación. Se ha dictado una ley que se llama del Trabajo a Tiempo Parcial, o trabajo compartido; significa básicamente golpear a las organizaciones de los trabajadores, porque significa crear una fuerza de trabajo paralela a la que está afiliado o está agrupado dentro de los sindicatos y dentro de las centrales obreras.

En el Ecuador existen dos Centrales que son los referentes fundamentales, en términos políticos, cuantitativos, cualitativos. La Confederación de Trabajadores del Ecuador y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres que es la versión de la CIOLS en el interior de nuestro país. Sin embargo no es el caso que puede acontecer en otros países. La dirigencia de un gran sector de la CIOLS, la CIOLS se llama CEOLS en Ecuador, tiene puntos de convergencia con la CTE y con una Central que también tiene un nivel de representatividad, aunque no mayoritario, pero que está vinculada al sector campesino-indígena, que es la CEDOCUT. Las tres Centrales constituimos lo que se llama el Frente Unitario de los Trabajadores, y precisamente es en este seno donde hemos venido levantando con fuerza posiciones, para de alguna manera, dar respuestas a las políticas del gobierno del actual presidente socialdemócrata, Rodrigo Borja, en el Ecuador.

Un gobierno socialdemócrata, sui generis, porque nosotros creemos que en cuanto a la política económica tiene más puntos de coincidencia con los gobiernos anteriores de corte neoliberal, que con implementaciones de carácter socialdemócrata. Pero lo que pasa en nuestros países latinoamericanos es que no gobiernan ni siquiera las clases dominantes criollas; gobiernan a través de esas clases dominantes el imperialismo norteamericano y los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional.

De tal manera que cuando el gobierno llama a los trabajadores a la concertación o al diálogo, nosotros sabemos que existe un límite más allá de la voluntad del propio gobierno, un límite impuesto desde los centros de poder internacional. De tal manera que los límites establecidos por el gobierno del Presidente Bush y por el Fondo Monetario Internacional han determinado que en la disputa de los grandes mercados, en la disputa de la competencia comercial cada vez se va perfilando con más claridad la Cuenca del Pacífico encabezada por Japón, el sistema de la Comunidad Económica Europea, que tiene una cierta hegemonía desde la Alemania Federal y el centro de producción comercial y financiero que significa los EE.UU. Estos tres grandes en el mundo, son los que están disputándose la hegemonía comercial y la hegemonía política en todo el planeta. Esto nos pone a nosotros, hoy más que nunca en evidencia de convertirnos, en términos cada vez más agudos, en el traspatio del imperialismo norteamericano. El mismo fenómeno de lo que ha significado desde el año 89 hasta este momento, el cambio de derroteros de los países del Este. Esto nos hace pensar que cada vez Latinoamérica está más aislada de las posibilidades del desarrollo y de la integración al desarrollo económico del mundo.

Entonces hoy en día a través de todos estos proyectos y de toda esta legislación, el gobierno norteamericano busca imponer en nuestros países las condiciones para hacer un mercado dependiente y agudizar las formas de explotación de los recursos naturales y humanos. El sistema de MAQUILA, todos los efectos letales que tiene para los trabajadores no sólo como individuos sino también como organizaciones colectivas, como frentes de masas, porque este sistema golpea a la organización de los trabajadores, está creando organizaciones paralelas dependientes directamente de los patrones y que, en este caso, el de la Maquila, son las transnacionales; frente a esto nosotros tenemos que hacer una introspección tanto en el interior de cada uno de nuestros países, pero fundamentalmente buscar, profundizar la mancomunidad latinoamericana y, si los trabajadores de España que de alguna manera, con especificidades distintas, sienten una coincidencia, una necesidad de converger clasistamente en la defensa de los derechos fundamentales, yo creo que perfectamente podemos tratar de buscar caminos para levantar un gran frente de lucha entre Iberoamérica, porque yo creo que la situación en esta década, la situación de explotación y de mayor empobrecimiento se va a agudizar.

Desde el punto de vista de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, y creemos que es válido para el resto de países de Latinoamérica, hemos levantado dos consignas fundamentales: una, la necesidad de elevar la conciencia política de los trabajadores y de las masas; en este

sentido creemos que la capacidad sindical y política son elementos fundamentales, hemos instalado, nosotros, como proyecto determinante en el desarrollo de nuestra Central, una Escuela de Formación Sindical, que tiene capacidad - el local - para cuarenta internos, con instalaciones modestas pero que cumplen funcionalmente en este propósito de ayudar en la capacitación política sobre todo de nuestros cuadros dirigentes de base y de dirigentes medios; porque en la medida que el pueblo, los trabajadores, seamos capaces de tener conciencia de nuestra realidad, seremos capaces también de dar respuestas contundentes a los problemas que estamos viviendo. La otra gran consigna es la de profundizar la unidad, una unidad que comienza desde los sindicatos de base pasando por lo que significan nuestras Centrales nacionales y sobrepasando los linderos impuestos por las fuerzas reaccionarias en la historia, que nos apartaron nuestros territorios para llegar a una gran unidad integracionista latinoamericana y tercermundista, porque pensamos que es la única forma de plantear alternativas democráticas, alternativas que no sean formas de desarrollo económico a expensas del pueblo, a expensas de las grandes mayorías y privilegiando siempre a los sectores minoritarios en las sociedades. Digo alternativas democráticas y populares que vayan disminuyendo la tremenda carga que cada vez se vuelve más pesada en los hombros de los trabajadores y de las grandes mayorías en nuestros países.

Creo que simplemente para tomar nota, como ejemplo, el salario de un trabajador ecuatoriano se ha deteriorado en 10 años. En 1981, en sucres, nominalmente un trabajador ganaba 4.500 sucres, que es la moneda ecuatoriana; traducido en dólares, el trabajador ecuatoriano había podido comprar 150 dólares, es decir 150 dólares era el salario mínimo vital en el Ecuador. Hoy, 10 años después, el salario nominal es de 32.000 sucres, sin embargo, al precio del dólar actual un trabajador apenas puede comprar 35 dólares, es decir se ha deteriorado el poder adquisitivo, el valor real del salario de un trabajador ecuatoriano es de 35 dólares al mes, lo que equivale a lo que gana un trabajador norteamericano en siete horas de trabajo. Pero no solamente es el problema del deterioro de los salarios, tenemos 300.000 desocupados absolutos, que significa un 14% de la población activa del Ecuador. Tenemos dos millones de subocupados, que significan el 65% de la población ecuatoriana activa. Hay un millón de déficit de vivienda; hay 620.000 niños con desnutrición crónica; 473.000 niños con desnutrición global; la tasa de mortalidad es de 8 puntos por 1.000; la mortalidad infantil es de 69,9 por 1.000; 84.000 dólares de déficit en la balanza comercial; el índice de inflación por encima del 55%; hay una baja permanente de las exportaciones con la salvedad de la coyuntura creada por el conflicto del Medio Oriente, pero la tónica ha sido la baja del precio del petróleo, reconociendo que en la actualidad el 70% de las exportaciones giran en torno al petróleo; hay un déficit fiscal previsto para este año de 20.000 millones de sucres.

El gobierno ha implementado una política gradualista porque, Latinoamérica desde la década de los ochenta, se ha convertido para los economistas del capitalismo en un laboratorio de experimentos; en algunos casos aplicando las políticas llamadas de "shock", que son los paquetes periódicos de medidas y que fue el sistema que utilizó el

gobierno anterior de Febres Cordero, frente a lo que es ahora el sistema del gradualismo que contempla el ir periódicamente, mensualmente, subiendo el costo de los combustibles, el costo de las tarifas de servicios, planteando una devaluación monetaria gradual, es decir, subiendo el precio del dólar gradualmente. Y por ese orden las políticas gradualistas, que no son sino una forma disimulada que quizás tenga en la práctica efectos mucho más inflacionarios que la misma política de "shock".

Esta es una panorámica un poco atropellada y breve de lo que es la realidad del Ecuador en el momento actual, que entiendo no difiere notablemente en términos políticos y económicos de otras realidades de los países latinoamericanos.

Cabría mencionar antes del resumen, que se han hecho esfuerzos muy importantes desde los trabajadores de la subregión andina, que contemplan Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, vinculado al proyecto de los gobiernos del pacto andino, de lo que fue el Acuerdo de Cartagena de hace más de una década pero que también tiene un espacio, una instancia que es Consejo Laboral Andino al que concurren representantes de las principales Centrales de Trabajadores de los cinco países. En esta instancia hemos hecho verdaderos esfuerzos por tratar que la integración no sea solamente la integración de los gobiernos y los empresarios, que al final es la integración de la clase dominante, sino que también haya una expresión de clase proletaria, que haya una integración auténtica de los trabajadores, y creemos cada vez con mayor convicción que no puede hablarse de integración de los pueblos mientras no estén integrados los trabajadores.

Yo terminaría haciendo este gran llamamiento a la necesidad de unirse entre todos los trabajadores de nuestros pueblos, creo que esa es la única alternativa y el gran compromiso de esta década. ■

CUBA

Interviene: Francisco Duran Harey
Sindicato: C.T.C.

CUBA

CAPITAL	LA HABANA
SUPERFICIE EN KM ²	110.861
○ Demografía	
POBLACION TOTAL	10.24 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	0.8 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	15 POR 1.000
○ Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	12.2
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	1.185
TASA DE INFLACION	0 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL. DOLARES)	7.5
GASTOS EN EDUCACION	14.2 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	10.7 POR 100 DEL PIB
○ Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	3.8 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	78.9 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	22.6 POR 100

EN el caso de nuestro país por el conocimiento que se tiene, Cuba es un archipiélago, conformado por una isla y un grupo de islas más pequeñas. Su extensión superficial es de 111.000 km² y, a finales de 1.987 nuestra población superaba los 10.356.000 habitantes. Tiene una tasa de natalidad del 17.4%; su tasa de mortalidad es de 11 por cada 1.000 nacidos vivos, incluso algunas provincias nuestras tienen niveles superiores a la de un número de países desarrollados (hay provincias con un 6 o 7 por mil), lo que nos coloca en una posición incluso privilegiada dentro de los países del tercer mundo. La esperanza de vida en Cuba ronda ya los 75 años y tiene una tendencia alcista. La composición de nuestra población es el 35% está en la escala de los 19 años, el 53% de 20 a 59 años, es decir más de la mitad de la población está dentro de la proporción de la fuerza laboral y, el 12% tiene más de 60 años. Como se conoce la jubilación en Cuba para los hombres es a partir de los 60 años y para las mujeres a partir de los 55, incluso nos ha llamado la atención que muchos países europeos, en el caso de las mujeres por ejemplo, la edad de jubilación es 10 años más que en el caso nuestro, a pesar que somos un país pobre y con cierto nivel de atraso. En Cuba existe la propiedad privada, minoritariamente, pero existe; el 10% de la tierra es estatal, la mayoría de los terratenientes de hoy recibieron la tierra de la Revolución, a través de títulos, cuando se implantó y se aplicó la Ley de Reforma Agraria. En Cuba existen cooperativas agropecuarias por libre voluntad, nosotros no hemos colectivizado ni colectivizaremos la agricultura a la fuerza, porque esa es una huella que no se borra. Lenin decía que la mentalidad campesina requeriría dos generaciones para borrarse y el que la colectiviza a la fuerza deja una semilla que después fructifica en contra propia.

Dentro del programa turístico, Cuba es un país con sol todo el año, con grandes riquezas naturales de playas, tanto en la isla principal como en las restantes islas. No tenemos capital para poder enfrentar eso, y hemos tenido que apelar a relaciones con empresas extranjeras (españolas, italianas, etc.), aunque estamos construyendo muchos hoteles cubanos; el peso fundamental de la industria hotelera es cubano pero no podemos ser absolutos y tenemos que buscar vías de desarrollo, incluso en la visita de Fidel a Brasil en una reunión con los comerciantes hizo propuestas concretas que propiciaron y facilitaron relaciones comerciales y abrieron unas posibilidades nuevas en esa dirección.

Tenemos insuficiencia económica dada por el bloqueo, dada por nuestros propios errores porque ninguna revolución es perfecta y además los que asumen la dirección económica no tenían experiencia, tienen que aprender sobre la marcha, sobre los golpes, sobre los errores que son las cosas que nos enseñan. Estamos librando una gran batalla por la autonomía de nuestras empresas para que la dirección burocrática no ejerza, y eso engendra contradicción y además porque, hay que decirlo, copiamos y malcopiamos algunos malos ejemplos que después nos han hecho daño. Estamos en un proceso de rectificaciones de todas estas cosas.

En Cuba se desarrolla la agricultura aceleradamente, introduciendo las técnicas más modernas, y hemos tenido que convertirnos en constructores de máquinas, de apiladoras, de coches ferroviarios, ... por culpa del bloqueo capitalista; lo estamos haciendo con algún componente occidental que nos reduce sustancialmente los precios y nos da la posibilidad, porque si no el intercambio nos traga por su garganta. Junto a ello el hecho mismo de que Cuba tenía su mercado condicionado a las relaciones de un 80% con el campo socialista.

La fuerza laboral supera los tres millones de habitantes, es decir casi un tercio de la población está considerada como fuerza laboral. Nuestra Central tiene afiliados más del 98% de los trabajadores; esta cifra que a veces llama la atención, es fruto de la tradición del trabajo sindical de nuestro país y de un trabajo fuerte del movimiento sindical durante años. Somos una organización que se autofinancia, no descontamos por nómina, cobramos mes a mes a cada trabajador y recaudamos una cifra superior a los 52 millones de pesos, póngase paritariamente con el dólar para que se tenga una idea del volumen financiero que nuestra Central recauda, es decir nos autofinanciamos y tenemos disponibilidades para desarrollar todo nuestro trabajo financiado por los trabajadores.

Estamos envueltos ahora en un proceso de elecciones que comenzó el primero de septiembre y que terminará el 15 de diciembre, similar al período de los compañeros españoles. Es un proceso que se he iniciado con un nivel muy alto de concurrencia de los trabajadores a la Asamblea que expresa la confianza y disposición de los trabajadores a asistir a las mismas. En Cuba existe la tradición de que ninguna asamblea debe darse con menos del 75% de los trabajadores, es una tradición histórica, por tanto para nosotros no es la mayoría simple sino el 75%, cualquier decisión debe ser tomada por la abrumadora mayoría de los trabajadores.

Somos una Central que cuenta con 17 Sindicatos Nacionales, y que tiene toda su estructura a través de todo el país y tenemos adscrita la CTCa la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, que ha jugado un papel histórico muy importante de respuesta a soluciones de todo tipo y que impidió que se paralizara nuestra industria y que mantuvieramos niveles aceptables de producción y productividad, a pesar del bloqueo norteamericano, sobre todo los primeros años después del triunfo de la Revolución.

En Cuba ha existido, históricamente, una sola Central. Desde el capitalismo nuestra primera Central surgió en el año 20 y nunca conocieron más de una Central. Es decir, en el movimiento sindical cubano hay una tradición de unidad, hay una tradición de Central única.

Al triunfo de la Revolución, Cuba era extraordinariamente pobre y con características similares en el orden económico, político y social a las mencionadas en otros países del área. Ha tenido que soportar la agresión, el bloqueo y todas las medidas extorsionadoras del imperialismo norteamericano. No voy a hacer un balance de la Revolución Cubana y de su clase obrera, pero cabría preguntarse cómo ha sido posible que un país pequeño, atrasado, agredido, bloqueado, haya sido capaz de transformar la imagen de nuestro país haciendo una reforma agraria, promoviendo un desarrollo industrial, erradicando la miseria, erradicando el desempleo, aunque se habló de desempleo ficticio al evaluar a los países de la Europa del Este, de los países socialistas; nuestro caso no es ése, independientemente que pueda haber en algún que otro lugar y existan niveles de burocracia y niveles de algún superávit, pero es que existen fuentes de empleo mayores como fruto del propio proceso del desarrollo económico. Cómo es posible que un pequeño país haya logrado subsistir al imperio más poderoso que ha conocido la humanidad en los últimos tiempos y haya podido desarrollarse alcanzando niveles de vida aceptables, tomando en consideración que en Cuba cuando hablamos de la solución de un problema no es la solución para una capa ni para una parte de la población. Cuando hablamos de cada actividad, siempre es considerando la población como un todo y no viendo una parte de la población con grandes privilegios mientras que otros sufren el escarmio, la miseria y el hambre. Entre otras cosas eso ha sido posible por la unidad de nuestro pueblo, por la unidad de la clase obrera, por el espíritu de clase. Este es un pueblo que abrazó el socialismo y lo convirtió en su obra, y la clase obrera protagonista principal de dichos triunfos, se erigió como la primera clase que asumió el poder en América Latina y que lo defenderá a toda costa y seguirá trabajando con tesón para llevar adelante la obra de la Revolución.

Hemos tenido que combatir con un enemigo muy poderoso, caudillo de todas las causas innobles en nuestro continente y en cualquier país del mundo. Un país que se somete a solidarizarse con cualquier causa injusta, ya sea en Suráfrica, ya sea en Israel, que es capaz de invadir, como ha invadido, a muchos países de América Latina a través de toda su historia y que, en oportunidades, como es usual, recibe la solidaridad de otros países con regímenes sociales similares. Recordamos muy recientemente la agresión a Panamá, fueron pocos los países que se solidarizaron con el pueblo panameño mientras en el El Chorrillo las bombas con la inscripción USA, caían masacrando al pueblo de Panamá. Pocas fueron las voces que se alzaron cuando la agresión a Granada, y recordamos muy bien cómo ese mismo imperialismo norteamericano se solidarizó con el gobierno inglés cuando la agresión de Las Malvinas.

El socialismo humanizó nuestro proceso y elevó al hombre a su verdadero y justo lugar. El movimiento sindical ha sido un elemento dinámico dentro de nuestro proceso. Sucede, a diferencia de otros países, que nuestras luchas son por un futuro mejor, no tenemos el problema grave que existe en otros lugares donde el gobierno es el enemigo principal, no hay una sola decisión en Cuba, que se tome referida a los trabajadores, en la que no participe nuestra Central y dé su visto bueno. Nuestra Central participa en las reuniones del Comité Ejecutivo

del Consejo de Ministros, o en los órganos del poder popular en las provincias; participa en los Consejos de Dirección de los Ministerios. Ello se da por el carácter social de la propiedad, y el carácter social de la apropiación social de las riquezas. ¿Podríamos preguntar qué países de Latinoamérica o del tercer mundo tienen los niveles de Cuba, y por qué esto ha sido posible?

No respondemos. Creemos que sólo el socialismo a corto, a mediano o distantesplazo. Puede ser que no esté al doblar la esquina, pero nosotros estamos convencidos de que no hay otra salida, aunque esté distante y aunque no se pueda precipitar porque cada país tiene el derecho y la libertad de coger su propio destino, y no podemos ofrecer recetas a ningún país que no sean sus propias recetas, pero estamos persuadidos en Cuba que no hay otro modelo de desarrollo, no hay otra fórmula que no sea la riqueza que engendra la clase obrera con su sudor y su esfuerzo la que pase a manos de toda la sociedad, y ello es posible cuando existe la propiedad social.

Nosotros consideramos éste como un momento muy complejo, un momento de mucha confusión, y un momento de dificultades para el movimiento revolucionario, eso es obvio. Momentos en los que el desaliento, la decepción, la claudicación ha tomado cuerpo en algunos compañeros. Pero nosotros tenemos la certeza y la convicción de los revolucionarios leales de que los reveses que en la historia han tenido lugar, se rehacen después con un florecimiento de las causas más justas.

Da la impresión que la lucha de clases ha desaparecido y que el capitalismo es el régimen eterno por voz y voto de las transnacionales; nosotros pensamos que el imperialismo está en plena crisis, que se expresa en su déficit presupuestario, en la imagen y en la secuela que ha sembrado en el mundo. Creo que el fenómeno de la Europa del Este, junto a la frustración general y las confusiones que ha promovido, también es un elemento claro de lo que está aconteciendo en esos países y de la reacción que están teniendo los movimientos populares y obreros en algunos de esos países a partir de las medidas capitalizadoras, y por eso nosotros creemos que eso no es el epílogo del socialismo, y tenemos una gran confianza de que el socialismo intrínseco es hijo de la crisis del capitalismo, porque el capitalismo no tiene salida a sus contradicciones ni las tendrá jamás, por el propio carácter antagónico de sus relaciones internas y por sus contradicciones insalvables.

Nosotros sustentamos que el imperialismo está en crisis y si no vemos el cuadro en toda América Latina, veamos el mundo y veamos incluso los propios EE.UU., donde hay más de 30 millones de norteamericanos que viven por debajo del nivel crítico de pobreza. Treinta millones de drogadictos. ¿Qué sucede en América Latina?, una deuda de más de 430 mil millones de pesos. Desde 1.982 hasta nuestros días, América Latina ha entregado más de 250 mil millones de dólares por servicio de la deuda. El 40% de sus exportaciones de bienes y servicios tiene que pagarlo en favor del pago del servicio de la deuda; en América Latina más del 40% de la población, que asciende ya a 500 millones, vive por debajo del nivel crítico de pobreza.

Recientemente se emitió la iniciativa Bush para las Américas o el plan para América como se le llama, ¿cuál

ha sido su primer mensaje?, el aporte de 300 millones de pesos a la región; 300 millones representa la mil cuatrocientos cuarenta y seisava parte de la América Latina de hoy; es decir, lo que Latinoamérica paga en el servicio de la deuda y reducción en 700 millones que es la

setenta y unava parte de lo que se paga cada año por la deuda. Nos hemos pronunciado muchos países y el movimiento sindical por el NO pago de la deuda externa, pero eso es una aspirina para nuestros grandes males, y además porque el no pago no va a solucionar ninguna situación en Latinoamérica. El problema va más allá, parte de estructuras económicas, políticas y sociales injustas y de una irracionalidad extraordinaria en la distribución de la riqueza. Por consiguiente mientras no se produzca un cambio estructural y mientras no cambien las relaciones desiguales de intercambio en el plano comercial, ninguna medida remediará, ni siquiera la condonación de la deuda, los graves problemas que tiene nuestro continente y que tiene el mundo de hoy.

Se ha dicho que para que los inversionistas europeos se sintieran estimulados en invertir en nuestro continente, tenía que haber una estabilidad política, pero eso es como el cuento del "huevo y la gallina", ¿puede haber estabilidad política sin estabilidad económica?, ¿puede haber estabilidad política en medio de condiciones infrahumanas de vida, de terrible miseria, de mortalidad de nuestros hijos?. No podrá haberla, y entonces ¿como es posible que se creen condiciones de estabilidad política para favorecer que los inversionistas dirijan sus capitales a América Latina?, por eso nosotros postulamos que el presente es realmente dramático y que América Latina está abocada a una situación, no diríamos sin salida, pero si una situación explosiva.

Nosotros creemos que antes de hablar del fortalecimiento del movimiento sindical con otros países, hay que hablar del fortalecimiento del movimiento sindical en nuestros países, no hay duda de que el fraccionamiento, que el nivel de afiliación, tiene mucho que ver con la situación extraordinariamente difícil de nuestros países y con la acción del imperialismo en favor de dividir, de fraccionar, de crear un clima de desconfianza. Pero pensamos que por encima de todo hay más cosas que nos unen de las que nos separan, pienso que un esfuerzo particular tiene que estar dirigido a fortalecer el movimiento sindical en nuestros respectivos países, a la unión con las fuerzas progresistas, sin perjuicios, formando bloques, constituyendo elementos de unión. Nosotros nos pronunciamos por la integración latinoamericana, porque aquí se habló de integración continental, pero nosotros no podemos integrarnos con EE.UU. ni con Canadá, nuestros intereses son muy distintos con respecto a todos esos países desarrollados, por tanto en el caso nuestro, en el caso de Cuba, nosotros nos pronunciamos por la integración latinoamericana, y sí creemos que es posible, porque en América Latina hay muchos recursos naturales y existe una voluntad, y ha crecido en los últimos años una tendencia a la necesidad de una gran patria latinoamericana. Pienso que hay que favorecer esa tendencia. Creo que hay que luchar con más fuerza que nunca contra el capitalismo, arrancarles niveles superiores de salario y de condiciones de vida y de trabajo para nuestros trabajadores. Nosotros sabemos las medidas, las presiones que

ejerce el FMI y el Banco Mundial, hoy no hay un sólo país estable en América Latina; el único país, además de Cuba, es el caso de Nicaragua en el periodo del gobierno sandinista, porque en todos los demás lugares, las medidas que se toman son en favor de los intereses de los poderosos y en contra de los desposeídos.

Por tanto no habrá democracia estable mientras no exista un cambio en las relaciones comerciales, creemos que una forma de ayuda, de solidaridad de los países desarrollados, es contribuir a la lucha y su batalla a ser más justas las relaciones de intercambio, lo que ocurre es que cualquier ajuste de igualdad implica afectaciones de los niveles de la clase obrera europea o de los países desarrollados. Creemos que la forma de lucha es, primeramente, la solidaridad; batallar por esos racionales y justos niveles de intercambio y creo que si por algo se deben pronunciar los sindicatos de los países desarrollados, es por contribuir al financiamiento del desarrollo de los países subdesarrollados, a partir de que su riqueza tiene que ver mucho con el desarrollo del colonialismo primero y del neocolonialismo después, y que pueden contribuir con su apoyo a saldar esa deuda contraída a través de siglos de explotación y de expoliación, aunque no sea directamente por la clase obrera de los países capitalistas, porque han sido los consorcios, la oligarquía internacional, han sido las transnacionales; pero creo que puede ser una batalla que pueden librar en favor de nuestros pueblos.

Por último decir que algunos sueñan con la desestabilización de Cuba y hacen esfuerzos para eso, pero Cuba es más estable que nunca y si visitaran allí los centros de trabajo, verían que los problemas de la Europa del Este no le ha quitado el sueño a la clase obrera cubana. Hay confianza en el porvenir. Hay programas muy serios para el desarrollo, se habla mucho de la salud y la educación, pero no podría haber salud ni educación si no hubiera programas para que todo el mundo comiera y para que todo el mundo tuviera una vida decorosa en sentido general. Por eso estamos confiados en el socialismo y decimos además, independientemente del camino cuya opción es libre para cada cual, a los países subdesarrollados y del tercer mundo que su único futuro que puede abordar los siglos de atraso, es el desarrollo socialista a partir de leyes y de regulaciones que den la posibilidad a los hombres de trabajar para sí mismos.

Quiero terminar diciendo que nos sentimos muy complacidos de haber estado aquí, independientemente de que haya algunos puntos en los que no hayamos coincidido, pero ha sido muy útil el intercambio de información. Cuando hablamos de estos problemas de relaciones internacionales, distinguimos bien el fenómeno transnacional, el fenómeno "monopolio" de clase obrera, y distinguimos porque las relaciones internacionales aún cuando puedan haber diferencias es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Por eso queríamos expresar nuestro agradecimiento por las condiciones que aquí se han propiciado para la celebración de este Encuentro. ■

COSTA RICA

Interviene: Susan H. Román Hernández
Sindicato: C.U.T.

COSTA RICA

CAPITAL	SAN JOSE
SUPERFICIE EN KM ²	50.700
○ Demografía	
POBLACION TOTAL	2.92 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.6 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	18 POR 1.000
○ Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	5.267
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	1.804
TASA DE INFLACION	10 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL.DOLARES)	4.500
GASTOS EN EDUCACION	4.6 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	0.6 POR 100 DEL PIB
○ Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	6.4 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	47.6 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	24.8 POR 100

A partir de los años 40, el estado costarricense ha sufrido grandes y profundas modificaciones, que aunque no cambia en esencia su objetivo de servir a una clase social, sí ha modificado sus funciones. Es así como pasa de ser un estado de carácter liberal, con poca ingerencia en los asuntos económicos a tener mayor ingerencia en lo relativo a la regulación de la economía. En este proceso de modernización, el estado extiende sus funciones, constituyéndose en un estado intervencionista. Se crearon decenas de instituciones, unas como parte del gobierno central y otras descentralizadas (autónomas). Algunos teóricos costarricenses para caracterizar el estado, lo denominan de diferentes formas, entre ellas: Estado proteccionista (para señalar el papel jugado por el estado para el desarrollo del sector industrial moderno en el marco del Mercado Común Centroamericano), Estado benefactor (para designar las funciones sociales que cumple en la salud, educación, servicios, etc.), Estado empresarial (refiriéndose a la incursión del estado en ramas de la producción a través de inversiones directas) y, Estado empleador (en el cual se pretende destacar el crecimiento del aparato estatal constituyéndose en una importante fuente de empleo).

La sustitución de un modelo de desarrollo por otro, en todo caso obedece a las fases del desarrollo del capitalismo internacional. En la producción de artículos agropecuarios para la exportación, como el café, que caracterizó a nuestra economía desde los primeros años de "independencia", la determinó primero la colonización y luego la insertación en el mercado capitalista (primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos).

Asimismo, al entrar el capitalismo en una nueva fase, en donde la disminución de la tasa general de la ganancia obliga a exportar capital, los países neo-colonizados son obligados a cambiar de modelo y abrir las puertas al capital extranjero por medio del Mercado Común Centroamericano. Para crear la infraestructura económica y social el estado costarricense recurrió al endeudamiento externo, cientos de industrias de "toque final" se instalaron en el área centroamericana, disfrutando no sólo de exoneraciones en los impuestos sobre la importación de sus productos, sino que además disfrutaron de créditos y servicios de transporte, electricidad, agua, combustibles subvencionados por el estado y como si fuera poco, las industrias extranjeras tuvieron a su disposición mano de obra muy barata.

Paralelo al crecimiento de la economía, el aparato creció. Surgen decenas de instituciones, unas para prestar los servicios que el nuevo modelo de desarrollo requería y, otras para dar servicios a la población (educación, salud) al no rendir los frutos deseados el "modelo de sustitución de importaciones", tales como que el desarrollo industrial permitiera resolver el problema del continuo déficit de la balanza de pagos, y así permitiera a la vez crear empleos y generar una dinámica que le permitiera a los países del área salir de su subdesarrollo, el estado tuvo que crear instituciones de apoyo a la economía. Estas instituciones remediarían los crecientes problemas de desempleo y pobreza que se agravaban cada vez más con el nuevo modelo.

Es así como florecen decenas de instituciones y el aparato estatal se constituye en un importante empleador. Este desarrollo elevó el nivel de vida de los costarricenses entre la década de los 60 y 70, fundamentado en el endeudamiento externo sostenido. A partir de 1982 en el país se comenzaron a aplicar una serie de medidas económicas destinadas a combatir la crisis y estabilizar la economía. La presencia del FMI, de la AID y del Banco Mundial se hizo cada vez más notoria, y lentamente las medidas de estabilización se transformaron en lo que hoy se conoce como programa de ajuste estructural (PAE). Programa con contenidos muy similares a los aplicados a otros países de América Latina, Asia y África. Se trata de una serie de medidas que buscan liberalizar el comercio exterior, bajando aranceles para los productos importados y promoviendo las exportaciones no tradicionales, favorecer las inversiones en la producción de importaciones no tradicionales, volver más eficiente el sistema financiero y a reducir el gasto público improductivo recortando los subsidios al consumo, limitando la prestación de servicios sociales y evitando el crecimiento del empleo público.

Se reitera entonces que cada gobierno viene aplicando medidas económicas al llegar a la Presidencia, Monge, Arias y en la actualidad el Presidente Calderón, medidas similares que se reflejan en el ajuste de precios y servicios, aumento de los impuestos y contracción de la demanda.

Los primeros meses de la actual administración en nuestro país, se enmarcan fundamentalmente en políticas monetarias, obligadas por el problema del déficit fiscal.

Esta política de prestarle más atención y de manera inmediata a los desequilibrios internos como son el expediente de medidas para reducir el déficit fiscal y las medidas anti-inflacionarias está creando en nuestro país una seria y profunda crisis social que afecta a los grandes conglomerados de trabajadores y el pueblo costarricense.

El enfoque monetarista promovido por los sectores neoliberales y radicales de la Administración actual, podemos resumirlo de la siguiente forma:

- a.- Restricción monetaria (que busca contraer liquidez)
- b.- Altas tasas de interés y recortes en el gasto público
- c.- Reducción y modificación de los precios relativos a bienes y servicios
- d.- Reprimir la demanda interna
- e.- Alza en el tipo de cambio para encarecer las importaciones

Debemos enfatizar que al igual que sucede en otras latitudes, los procesos de ajuste en cualquiera de las modalidades, tienen como fin la búsqueda de la recomposición capitalista en las relaciones sociales, incluyendo el papel del estado, restringir la democracia y lograr mayores desequilibrios contra el pueblo, lo que nos lleva, necesariamente, a decir que se da una mayor concentración de la riqueza en los sectores oligárquicos y un deterioro y empobrecimiento para las grandes mayorías de costarricenses.

En la actual administración, las medidas económicas del gobierno han sido o están por aprobarse en los siguientes rubros:

- aumento en las tarifas de los servicios públicos básicos (electricidad, agua, transporte, combustible)
- aumento en los precios de los artículos de primera necesidad (frijoles, arroz, maíz blanco, azúcar, harina)

Por otra parte el Paquete Tributario preve un alza en el impuesto de ventas de un 10 a un 13% y, un incremento del 5 al 10% en el de los aranceles a las importaciones.

La inflación a julio de 1990 está en un 16.87% y, según cálculos y estimaciones de los organismos oficiales llegará en diciembre del presente año a un 30%, que será desde luego un golpe contundente para la población asalariada y un deterioro real en el poder adquisitivo de los salarios.

Los programas de ajuste afectan también a las políticas de devaluación. El Banco Central devalúa el colón 0.45% semanalmente con referencia al dólar, en el campo monetario se restringe cada vez más la liquidez y el dinero en circulación. Las tasas de interés que se pagan por los créditos sobrepasan el 30%, llegando hasta un 36% en la banca estatal y al 40% en la banca privada.

La política social del gobierno está dirigida al recorte de recursos, contracción de la demanda y entregar subsidios ridículos a los sectores más pobres de nuestro país. La pobreza aumentó en Costa Rica de un 20 a un 25% en los últimos años y hoy existen 315.479 padres de familia que ganan menos de 2.724 colones mensuales (aproximadamente 25 dólares USA), asimismo 120.341 jefes de familia no tienen salario fijo y 250.000 costarricenses (una cuarta parte del mercado laboral) laboran en el campo informal de la economía. Para completar este cuadro tenebroso de la Costa Rica desconocida, debemos apuntar también que sólo el 40% de los costarricenses han cumplido la educación primaria, cerca de 140 mil personas que estaban estudiando este año no lo han podido hacer; en 1990 se cuantificó la suma de 797.730 menores de edad que laboraban en cualquier actividad, mientras que en las maquiladoras 143.275 jóvenes trabajan y devengan salarios menores que el mínimo legal.

Los cambios que ocurren en la economía y en la sociedad abren interrogantes sobre lo que puede ocurrir en el futuro, sobre todo en el avance por el camino de las reformas democráticas. La democratización de la sociedad en el plano económico se ha estancado, y los cambios acelerados no parecen contribuir al logro de la ampliación de la democracia costarricense.

El informe sobre evolución económica y social de Costa Rica en 1987, admite que los indicadores de salud se han estancado (aunque siguen siendo los mejores en el

contexto latinoamericano), que la calidad en la presentación de los servicios de salud se ha deteriorado, y que han vuelto a aparecer enfermedades cuya incidencia había descendido enormemente en el pasado: sarampión, rubeola, paludismo, diarreas infecciosas, enfermedades del aparato respiratorio y los parásitos.

Se admite también en nuestro país una mayor desigualdad social en base a la distribución del ingreso en el período 1.971-1.986 (el grupo de más altos ingresos incrementó su cuota de participación en el ingreso total de un 34% a un 36.2%, contrastando con la reducción que sufrió el grupo más pobre, que bajó de un 2.1% a un 1.2% en ese período. Así la brecha entre los ingresos bajos y los altos se incrementó dado que en 1.971 el ingreso de familias era del 16.5% veces más alto, mientras que para 1.986 esta relación se elevó 29.6 veces).

Estimaciones recientes indican que una cuarta parte de la población no satisface las necesidades básicas y que un 15% se encuentra en situación de pobreza extrema, la situación es más difícil en las áreas rurales, donde el 33% no satisface las necesidades básicas y el 20% se encuentra en estado de extrema pobreza.

Los defensores de la estrategia económica que se trata de imponer buscan incrementar la productividad nacional, para poder competir con éxito en los mercados internacionales, con nuevos y viejos productos, antes de pensar en políticas redistributivas del ingreso; con este propósito la empresa privada ha recibido una gran cantidad de estímulos además del mantenimiento de los salarios reales en niveles similares al año 1.979. Entre otros beneficios se encuentra el llamado "Certificado de Abono Tributario" o CAT que en 1.989 significó para el fisco dejar de percibir 5 mil millones de colones, recursos monopolizados por las empresas y un 40% del beneficio de esas sumas benefician solamente a cinco grupos exportadores.

A este cuadro debemos agregar que la sociedad costarricense está pasando por un período en el cual la corrupción ha alcanzado niveles desconocidos y el narcotráfico ha hecho su siniestra aparición. Es frecuente la denuncia contra altos funcionarios públicos, incluyendo las más altas autoridades del gobierno (Fondo Emergencias, Monge).

Pero la corrupción no parece ser un fenómeno sólo de la administración pública, sino también ocurre en la esfera de la empresa privada, como lo demuestra la quiebra misteriosa de algunas financieras en perjuicio de muchos costarricenses.

La política sindical del gobierno se inclina a un apoyo decidido al movimiento solidarista, sobre todo en la empresa privada donde estas organizaciones fomentadas y controladas por los empresarios en las cuales los trabajadores reciben algunos "beneficios" a cambio de la renuncia de sus derechos a la organización autónoma.

La OIT, la FSM y la CIOLS han denunciado las maniobras solidaristas que buscan desde una perspectiva de clase, suplantarse al sindicalismo como arma de lucha y reivindicación de los trabajadores.

En el sector privado el solidarismo enajena a los trabajadores, obnubila su conciencia y les obliga a la renuncia del paro, o la huelga como forma de reivindicación, no obstante la propaganda internacional, de vitrina, sobre la

democracia costarricense, hoy podemos afirmar que en ese sector no existe libertad sindical, aunque el estado costarricense haya ratificado los principales convenios de la OIT sobre la pertinente.

El proceso de desarticulación del sindicalismo en el sector privado continúa profundizándose y son las asociaciones solidaristas quienes predominan como forma de organización laboral, cooptadas por los patronos. Mientras prevalezca esta situación en la empresa privada difícilmente podría hablarse de una verdadera reactivación del sindicalismo en Costa Rica.

En el sector público es donde existe un mayor desarrollo histórico del movimiento sindical, sobre todo con el reformismo social demócrata impulsado en los años 50. No obstante la posibilidad que existe en ese sector, la afiliación sindical de la PEA (Población Económicamente Activa) no alcanza el 15%, agregando además que en nuestro país existe un gran fraccionamiento del sindicalismo.

En 1.987 aparecen registradas 7 Confederaciones sindicales, entre las que CUT, CCTD y CNT son quienes agrupan el mayor porcentaje de sindicatos. Mientras que el 53.4% de los sindicatos y el 27.8% de los afiliados se encuentran no confederados.

La Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) tiene 42 sindicatos afiliados, lo que equivale a un 7.4% del total de sindicatos (356). Asimismo la CUT tiene 80.112 afiliados, es decir un 17.1% del total (138.145).

De las Centrales Sindicales existen tres afiliadas a la CIOLS-ORIT, una a la CLAT-CMT y dos a la FSM. Entre las que está nuestra Central Unitaria de Trabajadores, que dicho sea de paso es la de mayor membresía en nuestro país y aglutina a trabajadores de las municipalidades, sector público, bancos, universidades, hospitales, campesinos y muy pocos reductos de trabajadores de la industria.

Desde 1.986 se impulsa un proyecto unitario que ha logrado un avance en las cúpulas dirigentes, pero con un total desconocimiento de las bases sindicales y sindicatos de base, nos referimos a la CPT. En el primer semestre han aparecido otras instancias unitarias de trabajo en la acción, que con una agenda de confluencia han logrado algunos avances importantes.

Con la llegada de la administración Social-Cristiana se ha dado un reactivamiento del movimiento popular, en especial del sindicalismo, demostrado en marchas, piquetes, paros de labores donde las organizaciones hemos logrado identificar la crisis, se ha iniciado una rearticulación del sindicalismo y en estos días luego del Paro Nacional del 24 de agosto, se han abierto algunas opciones de negociación de temas políticos y sociales como proyecto alterno de los trabajadores a los programas de ajuste estructural, sintetizados en cinco puntos fundamentales, como son costo de vida y salarios, libertad sindical, reforma integral del sistema de pensiones, problemática agraria y campesina, por las convenciones colectivas y laudos arbitrales.

Las perspectivas para el pueblo costarricense son nebulosas y como hemos tratado de demostrar existen dos Costa Rica, una opulenta, dueña de los medios de producción y de los medios de comunicación que detentan

los gobiernos sean éstos socialdemócratas o socialcristianos (eufemismo y etiqueta), y otra Costa Rica en franca crisis, pobre, deteriorada, que son la mayoría de costarricenses.

Las transformaciones de tono conservador de la sociedad costarricense, resultantes de la crisis, han creado nuevas condiciones para el accionar de los sectores populares. El deterioro de las funciones del estado reformista, así como el desgaste ideológico de los proyectos políticos, han cerrado los espacios tradicionales por medio de los cuales los trabajadores canalizaban sus demandas. Los partidos políticos han perdido capacidad de mediación, una prueba es que las demandas populares ya no se presentan a la Asamblea Legislativa, sino directamente a la Casa Presidencial. En este contexto, es de esperar que la inercia del sujeto popular sea superada y los trabajadores tengan que recurrir a la organización popular con más frecuencia que en el pasado, sin caer en las redes del clientelismo político, de manera que se vaya produciendo cierta reactivación de las organizaciones existentes. ■

BOLIVIA

Interviene: Julio Arce Torrico

Sindicato: C.O.B.

BOLIVIA

CAPITAL	LA PAZ
SUPERFICIE EN KM ²	1.098.581
● Demografía	
POBLACION TOTAL	7.19 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.8 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	110 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	3.943
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	570
TASA DE INFLACION	16 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL DOLARES)	4.1
GASTOS EN EDUCACION	0.4 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	3.0 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	25.8 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	53.7 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	17.7 POR 100

Voy a dividir en pequeños grupos la intervención, uno sería ¿cómo está funcionando la Central Obrera?, ¿que es la Central Obrera Boliviana? Es el organismo de todos los trabajadores y, que fue fundada en el año 52, después de una revolución de todo el pueblo donde se logra abolir definitivamente el "ponguiaje", el matonaje de las castas mestizas que existían en el país y donde el campesino empieza a tener derecho a la educación, a las elecciones, al voto, es decir, tiene los derechos de un hombre civilizado. Esto es consecuencia como decimos, de esta revolución donde son protagonistas, fundamentalmente, la clase trabajadora minera y los fabriles, así como los campesinos, en fin, varias organizaciones que conforman actualmente la Central Obrera Boliviana, aunque por entonces no en su totalidad.

Al año siguiente de esta revolución, y como consecuencia de ella, se funda la Central Obrera Boliviana. Desde entonces, hasta ahora, esta Central viene constituyendo la única organización laboral que agrupa a todos los sectores bolivianos. Está dividida en tres sectores:

- Sector Obrero (mineros, fabriles, ferrocarriles, petroleros, harina, luz, fuerza, servicio nacional de caminos, constructores)
- Sector campesino (campesinos que están sujetos a la reforma agraria y los colonizadores, sirringueros, castañeros)
- Sector de clase media o intelectual (magisterio urbano y rural, bancarios, periodistas universitarios y cooperativas mineras)

Esta sería la organización vertical que tiene la COB; la organización horizontal serían las Centrales Obreras Departamentales. Llamamos departamentos a los diferentes sectores en los que está dividida geográficamente Bolivia. Son nueve departamentos. Por tanto tenemos nueve Centrales Obreras departamentales que dependen directamente de la Central Obrera Boliviana. Estas apoyan, ayudan a las movilizaciones de la COB haciendo el trabajo departamental. Pero no termina ahí, las centrales departamentales tienen la obligación de conformar centrales regionales.

Hay que decir que el compañero Juan Lechín estuvo al frente de la COB durante 37 años, desde que se constituyó hasta hace cuatro años aproximadamente. Después Simón Reyes estuvo algo más de dos años y finalmente, está Víctor López.

Hay que indicar algo muy importante, el traba-

jador boliviano es directamente sindicalizado desde que ingresa a trabajar y consta que forma parte de una planilla de paro. No es sindicalizado si es trabajador eventual porque los trabajadores en Bolivia no pueden pasar de tres meses y no tienen ningún tipo de seguro social, ni beneficios. Simplemente deben cobrar el salario mínimo que actualmente es de 73 bolivianos (aproximadamente 22 dólares). Ese es el salario mínimo nominal, aunque con él un trabajador no puede subsistir y creemos que el salario mínimo real está fluctuando alrededor de 28 dólares. Una de las luchas más importantes que venimos sosteniendo desde tiempo atrás, es la de mantener a la COB como una única organización de los trabajadores y de las clases empobrecidas del país.

Todos los gobiernos ya sean elegidos democráticamente o de tipo dictatorial, han tratado por todos los medios de conformar otro tipo de organizaciones laborales para poder dividir la fuerza de la COB, pero esto hasta ahora no ha sido posible.

El gobierno actual está dirigido por Jaime Paz Zamora, candidato del partido MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), pero que en la actualidad es más derechista que el ADN (*), aunque sus inicios como partido fueran de izquierda.

Este gobierno está tratando de destruir con toda su fuerza a la COB, pero gracias a la conciencia de los trabajadores, de todo el pueblo en general, logra recibir el primer revés fuerte el día Primero de Mayo, cuando intenta montar una marcha paralela a la de la COB para mostrar la debilidad de ésta; pero los trabajadores, incluyendo a los miembros de su partido, participan en la marcha de la COB.

Hay que reconocer que estamos pasando por momentos muy difíciles, el anterior gobierno fue el primero en implantar esta nueva política neoliberal dictando un decreto, el 21060, en el que uno de sus puntos (el art. 55) habla de la libre contratación; esto no existía. En Bolivia gozábamos de la seguridad de la fuente de trabajo, sólo podíamos ser despedidos si se demostraba una actitud que estuviera en contra de normas morales o las reglas de la institución o la empresa, y además estas reglas eran discutidas por las mismas instituciones sindicales.

Pero entra este gobierno y llegamos al art. 55 del 21060, aprobado por el anterior gobierno, por la Cámara de Senadores y por la de Diputados, y echan a la calle a miles de compañeros mineros, miles de compañeros fabriles y cientos de compañeros petroleros. En fin, disminuyen numéricamente las fuerzas de la COB, en una proporción bastante alta. De 35.000 mineros quedan reducidos a 7.000, de 47.000 fabriles quedan reducidos a unos 12.000, los petroleros éramos cerca de 9.000 y alcanzamos actualmente la cifra de 4.000 o 4.500. Esto hace que la Central

Obrera Boliviana pierda una gran fuerza y que se encuentre debilitada. El compañero Juan Lechín no puede, en principio, afrontar este problema. Se dicta un estado de sitio en el que los trabajadores son reprimidos, residienciados en zonas inhóspitas, en los bosques, etc. Después de negociaciones se logra que queden en libertad los compañeros, pero no se puede retroceder en la política implantada por la Cámara de Senadores y Diputados.

A posteriori sale otro Decreto, el 20160, parecido, donde se ratifica todo ese sistema político y donde, definitivamente, a los trabajadores nos dejan una mínima posibilidad de mantener luchas. Volvemos a hacer movilizaciones, aunque más reducidas, y se vuelve a dictar el estado de sitio por el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, que desmantela a los grupos sindicales. Pasa este periodo y vienen las elecciones, cuyo resultado es este nuevo gobierno de coalición de la nueva mayoría que se llega a denominar "del acuerdo patriótico".

Emplea la misma política que en el resto de Latinoamérica, reducir el gasto público, se tiene menor cantidad de dinero en circulación, se frenan los créditos a las empresas estatales, etc. Pero ahora lo que están tratando de hacer es regalar, y decimos así porque es el término exacto, las riquezas naturales de Bolivia a cualquier capital ya sea nacional o transnacional.

Esto lo decimos porque, especialmente, en yacimientos donde los grupos que están dominando, puestos por el actual gobierno, también son los dirigentes sindicales que obedecían sus mandatos. Para poder lograr esto, en primer lugar a los dirigentes que eran del anterior gobierno los echan a la calle. En Bolivia ningún dirigente tiene seguridad de que cuando concluya su función sindical va a continuar en el trabajo. Es más, ser dirigente sindical es la seguridad de éste va a dejar sus funciones en cuanto concluya su dirección o su mandato en el fuero sindical.

Contamos con tres meses máximo para hacer cualquier tipo de rendición de cuentas que pueden hacerse mediante el Ministerio de Trabajo.

Esa es la realidad que estamos viviendo en Bolivia, estas son las dificultades que estamos pasando, y esa es la política en general a nivel laboral que está ejecutando el gobierno.

Hemos planteado al gobierno una plataforma reivindicativa con la que pensamos que se modificaría la actitud gubernamental. Hemos avanzado muy poco en la discusión porque los problemas se van suscitando con una rapidez mucho más grande que las soluciones que podríamos encontrar. Es más, el gobierno es un simple títere del gobierno de los EE.UU., del FMI, etc., tiene totalmente limitadas sus posibilidades para hacer negociaciones.

Logramos romper el límite que se había impuesto del 9% de incremento salarial, hasta el 18%. El 18% para los salarios mínimos y un 15% para los máximos. Está costado al gobierno serios problemas con el FMI que no le quiso dar desembolsos para poder seguir haciendo inversiones o equilibrar la balanza de pagos. Con la presión, con el trabajo, logramos romper ese límite porque demostramos que no estábamos pidiendo un incremento salarial sino simplemente estábamos pidiendo una reposición de lo que había sufrido la disminución de adquisición de productos de primera necesidad a nuestros salarios. Luego entramos a discutir una serie de problemas fundamentales, que son parte de nuestro salario, como la educación y la salud.

En Educación planteamos al gobierno que debe haber una serie de alternativas fundamentales para mejorar la educación en nuestro país; los 80.000 maestros, rurales y urbanos, que existen en nuestro país gozan de un salario promedio de 70 dólares máximo. La política actual del

gobierno es privatizar la enseñanza, matar la educación pública. Actualmente deben estar alrededor del 40% de los maestros con una pensión completa en la educación o media. ¿Que es ésto?. En algunos colegios, especialmente en algunos sectores, para que el magisterio no entre en huelga, haciendo reclamos de sus reivindicaciones, los padres de familia dan a estas escuelas o colegios fiscales un apoyo económico aparte del que el gobierno les dá. Esto puede fluctuar de 5 a 10 bolivianos que, teniendo en cuenta el número de alumnos, es una buena cantidad. Este es el sistema de ir privatizando ante la necesidad de tener que dar a los niños un mínimo de educación. Además este gobierno dicta el cierre de los primeros cursos de las normales donde se educa a los futuros maestros para enseñanza básica o secundaria; pero no en los cuarteles, donde se siguen manteniendo los colegios, las escuelas, los institutos donde van a formarse los militares. Este es un reclamo que se ha hecho formal y que no tiene respuesta porque no les conviene tocar ese sector que apoya directamente a la oligarquía.

Respecto del problema de la coca, el gobierno boliviano vive y subsiste actualmente gracias a la producción de la hoja de coca y la cocaína. La lucha contra el narcotráfico no existe en ninguna parte del mundo, lo único que se hace es una pantomima, una farsa para mostrar una imagen de que se está haciendo algo a beneficio de la salud pública de las poblaciones. Nosotros creemos que la lucha contra el narcotráfico como la plantean las grandes potencias, es totalmente equivocada porque no tiene ninguna alternativa de solución. Los compañeros que fueron echados de las minas, de las fábricas, etc., como único medio de subsistencia se trasladaron a los lugares de donde habían provenido, del campo, para volver a encontrar algún medio de subsistencia familiar. Ante esta situación se plantea que el único producto rentable en Bolivia es la coca, ya que cada planta dura aproximadamente 30 años y se puede cosechar 3 o 4 veces anualmente, además no necesita ningún tipo de productos químicos para poder subsistir. Fuera de todo ésto, la hoja de coca tiene un mercado asegurado, lo que no tiene ningún otro producto.

Dentro del programa, hemos venido discutiendo con este gobierno, con el anterior, con todos los gobiernos, para encontrar como punto fundamental y decisivo un proyecto alternativo de desarrollo en las zonas productoras de la hoja de coca, como única solución: producir otros productos a mayor costo, con menor ganancia, pero que sí son alternativos para la subsistencia familiar de los grupos de campesinos que viven en esta zona subtropical. No encontramos otra forma. No hay otra cosa que se pueda hacer.

El anterior gobierno firma con la COB tres convenios y dicta un decreto ley - el 1008 - que a excepción de dos o tres artículos, no está a favor del campesino y que además fue impuesto desde el gobierno de los EE.UU. Este decreto ley no es aceptado por nosotros porque relaciona y mezcla directamente la hoja de coca como un producto químico nocivo para la salud, cuando está demostrado, no por nosotros sino por universidades de EE.UU., que la hoja de coca es un alimento bastante sustantivo en sus productos, es alimenticio, y puede mantener a un hombre desnutrido como el boliviano, con falta de calorías, de alimentación de carbohidratos, etc. La hoja de coca es

una alternativa de subsistencia, y es por eso que estos señores dictaminan que hay dos tipos de hoja de coca, no por el tamaño o color, sino porque una es legal y la otra no. Entonces, los gobiernos aceptan y controlan que hay dos tipos de hoja de coca: la legal y la ilegal. Dicen que la hoja de coca legal es para uso directo: infusión (como té, como mate, etc.) o para masticación (es decir para meterla en el lateral de la boca y con salivación, extraer todas sus proteínas).

No podemos aceptar como Central Obrera Boliviana que se condene a esta gente a la muerte por hambre por simplemente sacar la producción de la hoja de coca. Por eso hemos discutido y hemos pedido que la lucha al narcotráfico se debe realizar en las

grandes ciudades, en las grandes capitales, que es donde realmente existen los grandes narcotraficantes. Estamos convencidos que en EE.UU., en sus grandes ciudades es donde más dólares se lavan y donde mayor cantidad de frutos reciben de las ganancias del narcotráfico y son los Estados Unidos los que favorecen estos capitales que van invirtiendo en otro tipo de cosas legales para poder tener mayor acumulación de dinero. Y es por eso que creemos, y no defendemos en absoluto el narcotráfico, que hay que combatirlo donde se debe. Nosotros rechazamos la militarización de las zonas productoras de la hoja de coca, sean nacionales o internacionales los que vayan a ellas. Estamos en esa lucha en la actualidad porque el Presidente Paz Zamora ha firmado un Anexo 3 en Nueva York, donde se le exige la militarización de las zonas productoras para que puedan combatir el narcotráfico, pero nosotros sabemos que eso es para reprimir al campesino. □

(*) *Alianza Democrática Nacional: partido derechista dirigido por el ex-dictador General Hugo Bánzer.*

GUATEMALA

Interviene: Carlos Enrique Diaz
Sindicato: UNSITRAGUA

GUATEMALA

CAPITAL	GUATEMALA
SUPERFICIE EN KM ²	108.890
● Demografía	
POBLACION TOTAL	8.93 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.9 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	59 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	8.395
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	940
TASA DE INFLACION	11.8 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL.DOLARES)	2.830
GASTOS EN EDUCACION	1.8 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	1.3 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	45 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	42.5 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	8.6 POR 100

EN Guatemala prevalece un grave enfrentamiento social que se expresa a través de diferentes formas y factores que desestabilizan a la sociedad en su conjunto y determinan la ausencia de paz en nuestro país. Indudablemente para avanzar en la construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional, se hace imperativo generar esfuerzos dirigidos a superar la problemática desde el fondo, y con ello minimizar el enfrentamiento social prevaleciente y dar pasos significativos hacia la construcción de la paz.

Con lo anterior, queremos dejar sentado que concebimos la Paz desde una perspectiva amplia; nuestros planteamientos no pueden limitarse al abordaje o tratamiento de uno o varios de los factores que determinan su ausencia. En consecuencia, ésta será producto de cambios mínimos en las estructuras de injusticia social, opresión, marginación, discriminación y represión de las mayorías; o sea, de la existencia de libertades políticas y derechos sociales, las posibilidades de vivir en condiciones humanas con acceso a la correcta distribución de la riqueza, educación, salud, cultura, vivienda, vestido, alimentación, recreación y el ejercicio pleno de las libertades y derechos de las mayorías.

La democracia está íntimamente relacionada con los aspectos señalados anteriormente, la cual además, no se basa en contenidos legales, ni en discursos demagógicos, ni en buenas intenciones, sino en hechos reales que vienen a constituirse en condiciones que sólo el pueblo construye y fortalece, cuando se organiza y lucha por sus derechos, dignidad e intereses. La lucha por su concreción comprende que la miseria niega al ser humano, que además de la existencia de partidos y elecciones se requieren condiciones de desarrollo en la sociedad, que permitan una superación constante de la población, que pueda manifestarse, organizarse, plantear y luchar por sus aspiraciones y legítimos derechos e intereses. La democracia no puede ser la organización y derechos para reducidas minorías; es la situación de las mayorías y por consiguiente, sólo es obra de éstas, que actúan sobre la base de la construcción de las condiciones mínimas que son la justicia social y el respeto absoluto de los derechos humanos.

Los elementos citados en los párrafos anteriores, a nuestro juicio, constituyen aspectos que en su planteamiento y desarrollo requieren conllevar un proceso democrático y el marco en que deben desenvolverse los esfuerzos de paz y re-

conciliación nacional. Estos elementos básicos, cuya presencia es mínima o inexistente en el proceso iniciado en 1.985 con la promulgación de la nueva Constitución política de la República, fundamentan la lucha de los diferentes sectores y sus expresiones organizativas por reencausarlo en un proceso verdaderamente democrático.

Lo mismo conlleva a visualizar con objetividad la crisis general que agobia al país (que en estos momentos alcanza extremos alarmantes), y que fundamentalmente recae sobre las mayorías empobrecidas que ven minados de manera indiscriminada derechos e intereses, traduciéndose en hambre, extrema pobreza, falta de educación, de salud, opresión, marginación y represión.

La política económica implementada en los últimos cinco años que básicamente ha introducido al país en un acelerado proceso de liberalización de la economía, ha contribuido a la profundización del deterioro de las condiciones de vida de los guatemaltecos, beneficiando únicamente al gobierno y al sector empresarial, pretendiendo con ello además, congraciarse con los organismos financieros internacionales (para ser sujeto de crédito) que imponen modelos antinacionales, generando mayores cargas tributarias, devaluación de la moneda, el encarecimiento de la generalidad de los productos, la pretensión de privatizar los servicios públicos y la reconversión de la industria (que indudablemente agudizará los índices de desempleo y pobreza), lo cual afecta directamente a los sectores populares.

La agudización de la crisis económica del país tiene sus raíces en el funcionamiento del sistema socioeconómico y en la forma en que en ese proceso se genera una desigualdad del ingreso y de la riqueza, y se caracteriza entonces en el modelo productivo retrógrado prevaleciente, la voracidad del sector oligarca, la sobre-explotación de los trabajadores y la dependencia económica, generando además, el saqueo de recursos naturales por las empresas nacionales y transnacionales. Al respecto, no existe disposición ni voluntad real para enfrentar y poner en práctica los necesarios cambios estructurales que modifiquen, aún en mínima parte, lo injusto del actual régimen de propiedad, sino la intención de salirle al paso a la problemática para su continuidad a través de medidas y programas que en su aplicación no se constituyen más que en salidas superficiales que agravan la situación general de las mayorías guatemaltecas. Esto a pesar del rechazo y demandas populares y de otros sectores democráticos, que plantean la necesaria búsqueda y aplicación de soluciones y medidas de fondo que salvaguarden el interés social. Las consecuentes secuelas sociales que se traducen en la drástica disminución de los niveles de vida de la población, carecen de una política gubernamental (exenta de elementos demagógicos) dirigida a superar dicha problemática; esto se refleja en los siguientes indicadores:

- Pobreza: aproximadamente el 88% de los guatemaltecos son pobres (no pueden satisfacer sus necesidades básicas), y más del 38% viven en extrema pobreza (no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades alimenticias)

- Vivienda: según estimaciones, existe un déficit de más de un millón de unidades (las familias que carecen de ésta oscilan entre el 46.5% y el 71.4%), el que crece a un ritmo de 67.000 viviendas anuales - los proyectos gubernamentales hacen efectiva la construcción de únicamente unas 3.000 unidades anuales -.

- Educación: el analfabetismo se calcula en aproximadamente un 70% de la población; existe un faltante de 44.000 aulas y de más de 22.000 maestros (para mantener el nivel educativo actual sería necesario crear 4.000 plazas al año - en los años 87 y 88, por ejemplo, se contempló la creación de 800 -)

- Salud: la esperanza de vida de los guatemaltecos es de 57.8 años; la mortalidad infantil en niños menores de un año es de 80 por mil; el 82% de los niños menores de cinco años padecen de algún grado de desnutrición; los servicios estatales de salud hasta el año 88 venían atendiendo únicamente una tercera parte de la población (más del 80% no tiene acceso a la medicina).

- Desempleo: más del 50% de la población económicamente activa está desempleada

- Tenencia de la tierra: la injusta distribución de la tierra en Guatemala (más del 70% de la tierra cultivable está en manos del 2% de la población).

Es el factor fundamental de la pobreza en nuestro país y el mayor obstáculo para el progreso y el desarrollo. Con respecto a esto último, tampoco existe disposición ni voluntad de impulsar un programa agrario que redistribuya la riqueza agraria y modifique el actual sistema de tenencia de la tierra, cuyo objetivo sea el de aprovechar al máximo los recursos que ofrece la naturaleza para satisfacer las necesidades alimentarias de la población.

Cerca del 70% de la población guatemalteca es indígena; esta inmensa mayoría ha sido marginada en todos los aspectos desde hace ya casi 500 años y sometida a un cruel y sistemático despojo de bienes materiales, etnocidio, genocidio, discriminación y opresión. La población indígena ha sido utilizada únicamente para satisfacer las necesidades de la producción de la riqueza. Sobre ella recae el grueso del analfabetismo, de la ausencia de posibilidades de contar con tierra para hacerla producir y ha sido mayoritariamente quien ha sufrido el despojo de ésta, y consecuentemente también, representa el mayor número de desempleados del país. Se persiste en la pretensión por distintas formas, de arrancarles su cultura y su tierra, lo que significa eliminar sus raíces. Tampoco se les permite desarrollar su propia organización.

Mantener esta situación sobre la población indígena, significa sostener y profundizar la crisis, porque es más de las dos terceras partes de la población guatemalteca que no tiene participación en el desarrollo económico, político y social del país. Además, es el grueso de la población que no tiene capacidad de consumo, ni siquiera de satisfacer las necesidades básicas, lo que estanca las posibilidades de desarrollo económico y de ampliación de la industria, el comercio y el servicio, al contar con un inmenso mercado sin las mencionadas posibilidades de consumo.

No obstante lo afirmado por el gobierno, existen serias y severas limitaciones a la libertad de organización en términos generales. No son pocos los casos de Sindicatos destruidos o mantenidos en un permanente acoso patronal y gubernamental para alcanzar su destrucción; de igual manera las demás formas de organización popular, especialmente aquellas que generan su trabajo en el campo, son señaladas de ilegales y subversivas, son perseguidos sus miembros y hasta secuestrados, torturados y asesina-

dos. Todo ello a pesar de que es innegable que la participación organizada de los trabajadores y del pueblo en general, es determinante para el progreso y desarrollo económico, social y político de un país, lo que en repetidas oportunidades ha sido valorado y reconocido por las iniciativas democráticas y progresistas del mundo, en lo que respecta a su importancia y lo fundamental de su libre ejercicio, plasmándolo en instrumentos jurídicos internacionales.

La falta de voluntad política para darle tratamiento a la problemática prevaleciente en el país, ha dado origen a la profundización de las diferencias entre los sectores que conforman la sociedad guatemalteca, llegando al alto grado de polarización presente en el enfrentamiento social, y de donde deviene la expresión más cruel y dolorosa como es el enfrentamiento armado interno que, indudablemente, afecta a la sociedad en su conjunto. Libertades y derechos fundamentales son violados en su expresión más aguda, especialmente en el caso de la población rural, a quienes se obliga a participar en los denominados "comités voluntarios de autodefensa civil" y a residir en aldeas modelo y polos de desarrollo. Al respecto, innumerables denuncias y protestas se han formulado por parte de los habitantes de diferentes comunidades en contra de este servicio forzado; también ha habido pronunciamientos favorables a su ejercicio por pequeños grupos que, invariablemente, se han señalado como afines al proyecto gubernamental.

Similares movilizaciones y denuncias se han dado con respecto a la permanencia de muchísimos guatemaltecos en las aldeas y polos de desarrollo que básicamente, por sus características, violan la libertad de locomoción y elección de domicilio a la población.

Se hace imperativa la creación de un ambiente de irrestricto respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, que de una u otra manera los diferentes sectores vemos sistemáticamente violados, así como la práctica real, honesta y equitativa de las leyes que rigen el país. En este aspecto, se hace indispensable el paso de lo puramente formal y declarativo a lo práctico y efectivo, en donde todos los individuos estén en igualdad de condiciones. Eliminar los actos represivos que conllevan violación a las leyes y derechos, como los casos concretos del derecho a la vida, de organización, de libre expresión, de práctica religiosa, de locomoción y libre elección de domicilio, salud, vivienda y todo aquello que contribuya o se refiera a las necesidades básicas del ser humano. Los esfuerzos de paz de Esquipulas II surgen como un acto alentador para los pueblos centroamericanos, especialmente para el pueblo guatemalteco. Dentro de ese contexto la firma del Acuerdo Básico para la Búsqueda de la Paz por Medios Políticos, se constituye en un acontecimiento esperanzador para la población guatemalteca. De tal magnitud es el beneplácito con que se le acoge, que la mayoría de sectores han expresado su disposición de brindar el aporte que les corresponde.

En esta misma dirección el Movimiento Sindical y Popular ha planteado una iniciativa de que toda su actividad gire alrededor de la lucha por la paz, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la democracia verdadera. Consideramos que para ello, necesariamente deben hacerse todos los esfuerzos humanamente posibles, para

que los demás sectores que conforman la sociedad guatemalteca den su aporte, pues la lucha por la paz y la reconciliación nacional no es patrimonio exclusivo de un sector o grupo particular. Partimos del hecho real y contundente de que la crisis, su agudización y efectos, serán superados únicamente con la realización de cambios que conlleven a aliviar la pesada carga de hambre, miseria, opresión y represión que soporta nuestro pueblo. Debe terminar la persecución, las amenazas, los secuestros, las desapariciones, las torturas, los asesinatos; la implementación de modelos organizativos cuyo objetivo se centre en ejercer control sobre la población, en la destrucción de aquellas expresiones propias de los trabajadores y del pueblo para la defensa de sus derechos, dignidad o intereses.

En ese sentido, reiteramos que somos de la convicción de que básicamente, la crisis general que agobia al país tendrá que ser superada con la participación activa y efectiva de todos los sectores, sobre los requisitos de justicia y libertad, lo cual define la manera como nuestro pueblo se propone cambiar la realidad, poniendo énfasis en la necesaria transformación cualitativa de la vida social, cuyas desigualdades imperantes demandan atención con mayor urgencia.

En cuanto al movimiento sindical, estamos ahora en un proceso de reactivación. Entre los años 76 al 81, hemos sido duramente golpeados, no podíamos organizarnos, ni reunirnos, todo lo debíamos hacer de forma clandestina. En los años 83-84 se crean las condiciones para poder hacer unas elecciones donde se elige Presidente, hasta entonces habíamos estado gobernados por Juntas Militares fruto de golpes de estado. Así en 1985 nace UNSITRAGUA que hace intentos de unidad con las demás organizaciones sindicales que existen en Guatemala; es en 1987 cuando esto se concreta y se forma la UASP (UNIDAD DE ACCIÓN SINDICAL Y POPULAR) y que tiene ahora su máxima representatividad dentro del movimiento sindical.

En la UASP están integradas, además de UNSITRAGUA, alrededor de 10 organizaciones como el Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala, la Coordinadora de Viudas de Guatemala, la Federación Sindical de Empleados Bancarios y de Seguros, el Comité de Unidad Campesina, la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, la Asociación de Estudiantes Universitarios, el Frente Sindical de la Costa Sur, el Consejo de Comunidades Etnicas "Runujel Junam", etc.

En el tema de la represión, hay que decir que somos constantemente vigilados tanto en nuestras casas como en la sede de los Sindicatos. Hay muchas amenazas a la Federación Nacional de Trabajadores del Estado, ya que son los que han puesto denuncias más serias. Otras Centrales tienen temor a hacer denuncias fuertes porque son perseguidos y amenazados, incluso han tenido que salir al exilio. La represión más seria se da en el campo, donde tienen sus bases el Comité de Unidad Campesina y la Coordinadora de Viudas.

Otra cosa importante es el salario. El salario mínimo es de 5.5 quetzales en el área urbana por día de trabajo (8 horas); en el campo el salario mínimo es de 4.5 quetzales, aunque esto no se cumple ya que normalmente el salario del campo es de 2 a 2.5 quetzales. Hay que decir que el equivalente en dólares USA es de 1 dólar = 6 quetzales.

Con respecto a los conflictos laborales, éstos se ven agravados ante la negativa patronal a reconocer y respetar los derechos de los trabajadores, el rechazo a la organización sindical y a la negociación colectiva.

La Unidad de Acción Sindical y Popular - UASP - reafirma su compromiso de luchar porque se privilegie la vía del diálogo y la negociación, porque es nuestra vocación firme y profunda seguiremos dando nuestro aporte como lo hemos venido haciendo, pues de ello depende el futuro de nuestro país. ■

HONDURAS

Interviene: Otoniel Juvencio Villeda Villeda
Sindicato: FUTH

HONDURAS

CAPITAL	TEGUCIGALPA
SUPERFICIE EN KM ²	112.090
○ Demografía	
POBLACION TOTAL	4.95 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	3.2 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	69 POR 1.000
○ Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	4.885
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	987
TASA DE INFLACION	11.4 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL. DOLARES)	3.260
GASTOS EN EDUCACION	4.9 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	1.7 POR 100 DEL PIB
○ Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	40.5 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	52.9 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	8.8 POR 100

COMPañEROS, reciban un saludo de parte de Honduras y de la Federación de los Trabajadores de Honduras (FUTH), a la que represento en estos momentos, y agradecerles la invitación. Honduras tiene 112.000 km²., con 5 millones de habitantes, y 1.5 millones de desempleados, y el 15% organizados. Así a grandes rasgos quiero comentarles la crisis hondureña.

Es evidente que el sistema económico imperante en Honduras, el del capitalismo para neocolonias, estancó el proceso iniciado por nuestros próceres para llegar a ser libres, soberanos e independientes; niega los derechos básicos del pueblo consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución de la República, e impide el desarrollo de nuestras propias fuerzas productivas, convirtiéndonos en un país atrasado y dependiente. Este sistema que se ha caracterizado por concentrar los principales medios de producción en manos de empresas transnacionales, terratenientes y capitalistas locales subordinados al capital transnacional, garantiza el aumento constante de la riqueza y su concentración en pocas manos, lo cual va en contra del espíritu de la Constitución.

Después de 25 años de lucha campesina no se ha aplicado una real transformación en el agro, estamos más bien ante un estancamiento de la Reforma Agraria, reducida a la simple titulación de tierras. Al no estar las tierras en manos del sector productivo del país, los campesinos, se ha generado una situación socioeconómica desastrosa, no por culpa de los campesinos sino porque en su ejecución ha faltado la voluntad y decisión política de los sectores gobernantes, al tiempo que en los últimos años se han emitido una serie de leyes que ostensiblemente han frenado el proceso de Reforma Agraria, entre las que destacan: la Ley de Bancos, Turismo y de la Producción Platanera. Asimismo, en el nuevo Código Penal de 1.983, en su capítulo V, se establece lo relativo a los delitos de terrorismo, entre los que tipifica la recuperación de tierras por parte de los campesinos.

Lo anterior explica el por qué la tenencia de la tierra continúa siendo altamente concentrada en Honduras, con un 20% de la tierra productiva en manos de las transnacionales y de 279 terratenientes, mientras que 126.000 pequeños agricultores (campesinos minifundistas) subsisten con menos de 4 hectáreas cada uno; asimismo, en el país existen más de 300.000 familias campesinas sin tierra, violentando el Decreto Ley 170 relativo a la Reforma Agraria.

No obstante el sector agropecuario está obligado a satisfacer la demanda interna de granos básicos; lo cierto es que el agro sigue dominado por una injusta distribución de la tierra y por una equivocada política de Reforma Agraria con incentivos de comercialización y asistencia técnica y crediticia al sector agropecuario de la exportación, quedando el sector reformado desprotegido y sin estímulos para la producción, ésto ha favorecido que en el momento actual estemos importando granos básicos.

La indebida e irracional explotación que se ha hecho de los recursos forestales y la ausencia de una efectiva acción estatal en las actividades de protección y conservación del bosque, ha ocasionado serios efectos en el medio ambiente y en el desequilibrio ecológico como son: la contaminación, la erosión hidrográfica, inundaciones y desbordes de los ríos, liquidación de la fauna y la flora, variaciones climáticas violentas, y otros. Todo lo cual atenta contra la vida de las actuales y futuras generaciones de la población hondureña.

La ausencia de control sobre la explotación de los recursos y la exportación de los productos con su bajo valor agregado, ha derivado en cuantiosas pérdidas para el país, constituyendo además un proceso de depredación de los recursos y de descapitalización de la economía nacional que atenta contra el futuro de nuestra sociedad.

El incipiente desarrollo industrial, es de carácter parasitario y dirigido principalmente por el capital extranjero de acuerdo a sus intereses, existiendo una clase empresarial muy exigua e incapaz para impulsar un proyecto de desarrollo auténticamente nacionalista.

El Estado se ha convertido en "protector" del capital nacional y extranjero por medio de incentivos fiscales, subsidios, construcción selectiva de infraestructura económica y emisión de leyes especiales. En este mismo orden de cosas, muchos empresarios se han dedicado al saqueo del erario público; todo esto denota no sólo el parasitismo del empresario hondureño sino también su directa responsabilidad en el descalabro económico del aparato estatal; sin embargo, eludiendo esta responsabilidad y obedeciendo los dictados del capital extranjero, los empresarios presionan permanentemente para que muchas funciones del Estado pasen a manos privadas. En acatamiento a estas presiones, los gobiernos implementan una política tendente a la privatización de las empresas que ofrecen mayores posibilidades de rentabilidad y contribuye a una mayor desnacionalización de nuestra economía.

Producto de la injerencia partidista tradicional se ha producido un incremento exagerado de la burocracia improductiva con altos sueldos que trae, como consecuencia inmediata, un elevado déficit fiscal. Los servicios públicos que el estado ofrece son cada vez más deficientes y con altas tarifas que castigan a la población mayoritaria del país.

Existe un déficit crónico en el presupuesto y se aplica una política que mientras reduce los presupuestos de las áreas sociales (educación, salud, vivienda, seguridad social, reforma agraria), mantiene un elevado financiamiento para las Fuerzas Armadas y partidas globales a los poderes del estado. Esta política brinda exenciones y privilegios a la empresa privada nacional y transnacional que repercute en la deuda externa que no podemos pagar y en una moneda depreciada y prácticamente devaluada. Los

culpables de esta crisis no somos nosotros, de ella hay que responsabilizar a sus promotores y beneficiarios y no a sus víctimas.

La situación geopolítica del área centroamericana, ha hecho más evidente que la soberanía y el poder no está en el pueblo y demuestra que el país no tiene una conducción gubernativa unitaria, tal como lo establece la Constitución, por cuanto, en el ejercicio de la función pública es clara la participación a veces coincidente, pero muchas veces contradictoria de tres poderes reales: el grupo civil que gobierna, las Fuerzas Armadas y el Gobierno de los Estados Unidos (a través de la Embajada y sus Agencias: AID, CIA, etc.).

En lo que se refiere a la política externa, ésta continúa fomentada en intereses y presiones foráneas más que en las legítimas aspiraciones de la nación hondureña, como parte de ella se ejecuta un juego de maniobras políticas y militares que afectan nuestra dignidad como nación. Sin embargo, los acuerdos presidenciales centroamericanos suscritos en Esquipulas, Costa del Sol, y más recientemente en Tela, en respuesta a la lucha de los pueblos centroamericanos, constituyen un paso hacia la consecución de la paz. Será la voluntad política del actual y próximo gobierno la que mostrará, con el cumplimiento de tales acuerdos, la capacidad de independencia del país.

El Decreto Ley 33, incorporado en el nuevo Código Penal, ha desatado un proceso de represión que vivimos como pueblo; esto ha dejado un saldo de más de 150 desaparecidos, asesinatos, encarcelamientos y torturas a líderes populares, y el irrespeto a la libertad de organización, violentando los derechos humanos y sindicales.

Como producto del injusto modelo económico social, con su desigual distribución de la tierra implementado en el país, se da un acelerado crecimiento urbano. Tal situación ha provocado el incremento de la miseria urbana; en los barrios populares se vive sin los servicios mínimos de agua, alcantarillado, salud, educación y vivienda adecuados, que eliminan el hacinamiento y la promiscuidad.

No obstante que las leyes que regulan las relaciones obrero-patronales (Código del Trabajo, Ley de Servicios Civiles y otras), no garantizan plenamente la libertad de organización, la contratación colectiva y la huelga, éstas son permanentemente violadas.

El sistema económico que hemos resumido, al excluir de sus beneficiarios a amplios sectores populares y garantizar la concentración de la riqueza en una minoría, lo hace por sí un modelo antidemocrático y represivo; sin embargo, para ocultarlo, los círculos gobernantes utilizan el expediente electoral cada cuatro años que, aunque no deja de ser importante en la vida política del país, excluye al final de cuentas a los sectores populares de su efectiva participación en las grandes decisiones que afectan nuestro futuro y el futuro de nuestra nación. Desde la declaración de nuestra independencia, el pueblo ha luchado por reformar el sistema económico post-colonial y en lo que va de siglo por reformar el sistema neo-colonial; en la mayoría de los casos no hemos visto satisfechas nuestras aspiraciones de abolir el atraso y la dependencia y construir nuestra auténtica independencia nacional.

La gran Huelga de 1954, originó cambios en lo social,

económico, político y cultural que es necesario continuar impulsando; esta tarea corresponde encabezarla a los obreros, campesinos, profesionales y cooperativistas del país, sin excluir a los pequeños propietarios y a muchos empresarios patriotas.

La mayoría del pueblo hondureño vive en condiciones de injusticia social: la dependencia política y económica de Honduras tiene claras manifestaciones en casi todas las decisiones gubernamentales; la penetración cultural y educativa ha alejado a la población del conocimiento real de los valores nacionales y de la defensa de su soberanía; los grupos dominantes del país no se han interesado en desarrollar un verdadero proyecto nacional, estos aspectos, en su conjunto, han impedido y han dañado el proceso de identidad nacional que todos estamos en la obligación de construir y consolidar.

La Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), en aras de buscar la unidad en el país, ha propiciado lo que se llama la "Plataforma de Lucha para Democratizar Honduras". Hay que decir que es la segunda democratización, pero ésta es la verdadera y la quisiéramos impulsar nosotros.

Ha sido presentado un documento al Gobierno de la República por esta Plataforma, pero desgraciadamente no se ha podido llegar a acuerdos con ellos, porque la empresa privada no está conforme. De todos los puntos que presentamos (organizativo, económico, social y político), sólo estaban de acuerdo en dos de ellos. Ese es el movimiento de unidad que hemos conformado coyunturalmente para hacer frente a la lucha del gobierno contra los trabajadores. Sólo queda decir quién conforma esta Plataforma, y son las siguientes organizaciones: Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas Hondureñas (COCOCH), Confederación Hondureña de Cooperativas (CHC), Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH), Central General de Trabajadores (CGT), Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH), y nosotros, Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH).

También la FUTH, buscando una unidad más concreta, se dió la tarea de formar la CUTH (Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras), con los campesinos, con los maestros, y con la FITH; pero el gobierno en su afán de no querer que los trabajadores se unan para poder luchar más en bloque y poder contrarrestar sus maniobras ha tratado de dividir todas estas organizaciones.

También la FUTH en el afán no sólo de Honduras, sino de querer también unir, lo que se dice buscar una unidad a nivel regional, ha montado una Coordinadora Centroamericana de Trabajadores que se llama COCENTRA, con las organizaciones más valiosas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Esto de la unidad latinoamericana es el problema centroamericano; sería bueno unir todas las fuerzas para poder hacer un bloque de lucha ante el imperialismo y así poder traer nuestras propias riquezas a los trabajadores. ■

PARAGUAY

Interviene: Sixto Ramón Centurión Britos
Sindicato: C.U.T.

PARAGUAY

CAPITAL	ASUNCION
SUPERFICIE EN KM ²	406.752
○ Demografía	
POBLACION TOTAL	4.16 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.9 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	42 POR 1.000
○ Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	4.77
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	1.180
TASA DE INFLACION	28 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL.DOLARES)	2.2
GASTOS EN EDUCACION	1.5 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	1.4 POR 100 DEL PIB
○ Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	11.8 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	49.4 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	9.4 POR 100

PARAGUAY ha sufrido una dictadura de 35 años. Esta dictadura fascista dejó secuelas en el movimiento popular en general y en especial para la clase trabajadora, a base de sangre, de muerte y de persecución en todo este periodo.

Dentro de este marco, el movimiento obrero fue organizado y reorganizado periódicamente. Se sufrieron los acosos de la persecución, pero rápidamente hemos sabido reagruparnos nuevamente y en este momento estamos en el Paraguay en una Central clasista, independiente y democrática. Compartimos las experiencias de los compañeros del Cono Sur, especialmente de los compañeros de la CUT de Brasil, del PIT-CNT, que en los tiempos de la dictadura nos han dado el apoyo solidario a través de cooperaciones con nuestras organizaciones clandestinas o semiclandestinas.

A partir de eso, se puso la base para organizar el movimiento obrero en una central unitaria, la CUT. Su característica principal es haber incorporado dentro de la central al sector campesino y al sector de lo que se llama normalmente el "sector informal" o "cuentapropistas", que es un poco una consecuencia de un sector que cada día va aumentando más, dada la nueva implantación del sistema neoliberal en nuestros países, en donde los trabajadores son expulsados a las calles y como alternativa tienen la de tomar sus pequeños carros y vender cosas por las calles tratando de subsistir. Entonces considerando esta situación, nuestra Central incorpora a ese sector de trabajadores para plantearse reivindicaciones.

En Paraguay existen tres Centrales: una, la Central Paraguaya de Trabajadores, que sirvió prácticamente de brazo sindical a la dictadura; está muy desprestigiada y tuvo su momento histórico en los primeros tiempos de la dictadura, cuando se dismanteló el movimiento obrero; en 1.958 se realizó en Paraguay la última Huelga General, y a partir de ella, fueron perseguidos, encarcelados y muertos y algunos dirigentes de la CPT, fueron confinados o expulsados del país.

Estos dirigentes que se mantuvieron 35 años en el exilio (el tiempo que duró la dictadura), volvieron a Paraguay pero ya no tenían la misma visión que los que estaban dentro; mientras tanto, se había formado una nueva generación de sindicalistas que veían otras necesidades para el movimiento obrero paraguayo y que ahora conforman la dirección de la Central Unitaria de Trabajadores. La tercera central es de línea social-cristiana y se llama la CNT.

En tiempos de la dictadura, la expresión de la CUT era el Movimiento Intersindical de los Trabajadores que, aproximadamente, lo componían no más de ocho sindicatos de base; pero luego del golpe se logró desarrollar rápidamente y todos los trabajadores se organizaron y en el Congreso Fundacional contamos con 80 organizaciones, más las organizaciones campesinas. En este momento tenemos afiliados unos 120 sindicatos, organizados unos por nosotros y otros que se han salido de la CPT y se han incorporado a nuestra Central.

En cuanto al proceso democrático hemos notado una diferencia que nos interesa mantener en este momento, es la posibilidad de organizarnos y de tener libertad de expresión, eso no lo tuvimos en la dictadura, y nos interesa mantener porque es un elemento importante para consolidar el movimiento obrero y en general el movimiento popular.

No tenemos que perder de vista que al caer la dictadura y tener los trabajadores posibilidad de organizarse y de poder ejercer la libertad de expresión, al recuperar esos elementos, los trabajadores se organizan pero tienen una respuesta muy dura por parte de la patronal que, durante todo ese tiempo, no ha permitido el más mínimo diálogo, ni comprende ni acepta ningún tipo de organización obrera. La situación para nosotros es muy difícil, porque sindicato que se organiza es crisis automáticamente, hay despido y persecución patronal a las organizaciones sindicales. En un año tuvimos, aproximadamente, a unos 1.000 dirigentes sindicales despedidos por solamente el intento de organizarse.

La desocupación es otro fenómeno similar al resto de los países de América Latina. Aquí cabe una aclaración. Tenemos más o menos unos 300.000 campesinos que están luchando por un pedazo de tierra. El territorio paraguayo es de 6.000 km²; cuenta con una población de unos 4 millones de habitantes, pero hemos visto que aunque la extensión de tierra sea muy grande con relación a la población, la ocupación es muy reducida.

Otro tema es el salario mínimo. En Paraguay es de aproximadamente unos 170-180 dólares, muy alto con relación a otros países. Pero tenemos que hacer una aclaración necesaria por las características de la dictadura. El salario mínimo era el salario privilegiado del trabajador. Solamente un 20% de los trabajadores ganan ese salario; un 70% de los trabajadores ganan la mitad o menos de ese salario mínimo.

La cuestión de la contratación colectiva es un tema que se está iniciando ahora puesto que la sindicalización estaba prohibida, porque se tenía el concepto de que sindicato = comunista, comunista = subversión, subversión = terrorismo. Entonces había pocos sindicalistas.

Otro tema muy importante es la desocupación o el sector informal, que han crecido mucho porque el campesinado al no haberseles entregado la tierra en condiciones para la explotación, se han acercado a la ciudad, y de allí a la desocupación. Sin embargo hay sectores de campesinos que se han quedado en el campo y se han organizado, a veces hacen ocupaciones de latifundios y son reprimidos violentamente, tal es el caso que se han dado algunas muertes en estas ocupaciones de latifundios improductivos, porque estamos hablando de que las tierras ocupadas son tierras no trabajadas.

En el sector público no se tiene derecho a la sindicalización, aún siendo un sector muy numeroso de trabajadores. Están llevando una lucha muy dura por ello los trabajadores del Magisterio, también otros sectores públicos como el del alumbrado, de cementeras, etc., a pesar de la prohibición los trabajadores se están organizando.

Como venimos de una dictadura, tenemos muy pocos militantes, hay pues una crisis de crecimiento para nosotros. Aunque hay compañeros que están interesados en organizarse, pero sin tener la más mínima idea de lo que eso significa o de lo que es el sindicalismo, por tanto, tenemos que partir de cero. Por eso valoramos y seguiremos valorando el apoyo de los trabajadores de otros países, y que para nosotros es un ejemplo de cooperación.

Así a grandes rasgos les he expuesto la situación del movimiento sindical en Paraguay, y también de la Central Unitaria del Paraguay. ■

PERU

Interviene: Hector Chavez Silipu
Sindicato: C.G.T.P.

PERU

CAPITAL	LIMA
SUPERFICIE EN KM ²	1.285.216
● Demografía	
POBLACION TOTAL	21.7 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	17 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	2.5 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	26.885
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	1.300
TASA DE INFLACION	2.773.3 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL. DOLARES)	20
GASTOS EN EDUCACION	3.3 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	2.1 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	15.2 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	79.3 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	24.6 POR 100

ME cabe señalar que los trabajadores peruanos estamos viviendo los primeros veinte días de un nuevo proyecto económico neoliberal que el imperialismo viene aplicando en nuestro país, y que por cierto tiene algunas características particulares.

Si bien es cierto que Perú vive un nuevo gobierno que llega al poder sin defender ningún programa, y que gana las elecciones en forma abrumadora, contando incluso con los votos de los sectores populares, de los trabajadores. Esto se debe a que este gobierno se contraponía de forma abierta a la política de "shock" que venía enarbolando en su campaña uno de los partidos de la derecha y que además estaba encabezado por el escritor Mario Vargas Llosa.

Pero ¿que pasaba antes de las elecciones de Junio y Abril de 1.990?. No se puede entender que los trabajadores vivíamos uno de los mejores gobiernos, al contrario. Alan García Pérez anunció en su programa que venía a hacer un gobierno de los trabajadores, un gobierno popular y ya en el poder no hizo sino ir en contra de los trabajadores, mayormente de los sindicalizados como sector privilegiado de la sociedad. Decía que era el privilegiado de la sociedad porque este grupo de trabajadores tenían la posibilidad de presentar un pliego de reclamos en forma anual; era el único sector de la sociedad que tenía la posibilidad de regular remuneraciones en forma anual. Entonces por ahí empezó el ataque de Alan Garcia contra el movimiento sindical.

Más adelante Alan García en reuniones con los "Doce Apostoles" (se conocen así los 12 grupos económicos más fuertes de Perú), se aviene a las peticiones de los empresarios de flexibilizar algunos métodos, algunas cuestiones laborales como por ejemplo, la estabilidad en el empleo. Y así, vía Decretos Supremos, vía leyes del gobierno, se conculcan muchos derechos de los trabajadores.

Esta es un poco la panorámica en el campo laboral que deja el gobierno del APRA, y que hoy se ha agudizado con el nuevo gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Este sale elegido en la segunda vuelta electoral; gana la primera con una amplia mayoría, pero no llega a la mitad que establecen los reglamentos electorales y es necesario ir a una segunda vuelta. En ella este tecnócrata, este Rector de la Universidad Agraria, gana las elecciones de forma abrumadora con casi el 60% del electorado nacional. Pero, ¿qué ofrecía al pueblo para que le apoyasen de esa manera

desde los jóvenes hasta los sectores más pauperizados del país?. Ofrecía, en el campo laboral, el respeto a los derechos de los trabajadores, el respeto a la estabilidad en el empleo, no a la política de shock, elevación moderada de la canasta familiar, etc..

Una vez elegido, antes de asumir la Presidencia, hace una gira por Estados Unidos y allí se reúne con representantes del FMI, con algunos accionistas de transnacionales; hace una visita a Japón. Cuando viene de estas giras, renuncia al programa que había ofertado y argumenta que la única salida a la crisis es la política de shock.

Y así, el 8 de Agosto, el Gobierno anuncia las primeras medidas de carácter económico, que no son otra cosa que la política de shock, el "paquetazo", que ha sumido al país en una de sus peores crisis, ha aumentado el hambre, a los sectores empobrecidos los ha depauperado, ha aumentado la canasta familiar en diez, doce o trece veces, la gasolina que estaba antes del paquetazo a 25 mil intis, se paga ahora a 650 mil, etc.

El 20 de agosto el gobierno dicta una serie de disposiciones agresivas contra el movimiento sindical y los trabajadores. Primero como explicar que habiendo subido los precios de los productos básicos en un 600 o 700%, sólo se elevan los salarios de los trabajadores en un 100%; teniendo en cuenta que el salario ronda los 30 dólares mensuales.

Por otro lado el objetivo de Fujimori era reinsertar a Perú en la economía mundial, es decir, restablecer los lazos con el FMI ya que con el gobierno de Alan García estos estaban deteriorados. Por ello, nosotros, la CGTP, estamos convencidos de que Fujimori se ha entregado en cuerpo y alma a la derecha y a los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas.

En cuanto al movimiento sindical, en Perú existen cuatro Centrales Sindicales: la CGTP, la CTP (hasta el año pasado era progubernamental), la CRTP y la CNP. Si se trata de ver cual de ellas tiene mayor número de trabajadores afiliados, tenemos que decir que la CGTP; en segundo lugar la CTP y las dos restantes tiene un número ínfimo de afiliados.

La CGTP a veinte días de las medidas económicas del gobierno convoca un Paro Nacional. Aunque en nuestro país esta ocurriendo algo inexplicable, mientras que por un lado hay sectores que se mueren de hambre, trabajadores con bajos salarios que no les alcanzan para sobrevivir, por otro no hay posibilidades de movilización. Un fenómeno que quizás necesita un estudio más profundo por nuestra parte, porque el Paro del día 21 no tuvo la contundencia que cabría esperar.

La CGTP tras el relativo éxito del Paro Sindical del 21 de Agosto donde no fuimos capaces de aglutinar a los sectores populares que queríamos, está haciendo una serie de trabajos, de convocatorias y estableciendo un plan a medio plazo, eso significa bajar a las bases, y hacer más trabajo con el movimiento sindical y popular.

El otro tema que está golpeando al pueblo es la violencia política. Esta le ha costado al movimiento sindical la pérdida de valiosos dirigentes. Violencia del estado, tanto por grupos de paramilitares (en la época de Alan García nace un grupo, el Rodrigo Franco, que se dedica al asesinato selectivo de dirigentes sindicales y de

aquellos que se oponen a la política del APRA), como por las fuerzas represivas del gobierno.

En cuanto al narcotráfico, se habla de que el imperialismo quiere establecer un cuerpo militar en el área de Colombia, Perú y Bolivia para combatir el narcotráfico. Nuestro gobierno ha dicho que no va a permitir tropas militares estadounidenses en el Alto Huallaga, que es la zona convulsionada, sin embargo hay contactos, hay asesores que vienen desarrollando actividades, y que por ahora se concretan en desapariciones de dirigentes sindicales. La CGTP tiene a un dirigente nacional, un compañero de Consejo Nacional, perteneciente al sector de la educación de la Universidad que está desaparecido; también el compañero Saúl Cantoral, dirigente minero, fue asesinado en Lima por un grupo paramilitar, y así una serie de asesinatos, que el gobierno utiliza so pretexto del terrorismo o, según ellos, del narcoterrorismo. Son cuestiones de las que no tengo aquí datos estadísticos, pero espero hayan servido como aporte. ■

URUGUAY

Interviene: Alvaro Padrón

Sindicato: P.I.T. - C.N.T.

URUGUAY

CAPITAL	MONTEVIDEO
SUPERFICIE EN KM ²	176.215
● Demografía	
POBLACION TOTAL	3,08 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	0,8 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	27 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	8,41
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	2.730
TASA DE INFLACION	80,0 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL.DOLARES)	6,3
GASTOS EN EDUCACION	3,1 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	2,3 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	5,0 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	78,8 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	41,6 POR 100

M E voy a referir a tres aspectos que tienen que ver con mi país, pero que a estas alturas somos conscientes de que hablar de los problemas de un país es hablar de los problemas de todas las regiones. Es muy difícil, entonces, referirme exclusivamente a nuestras realidades, sin abordar la situación de toda la región.

Las tres cuestiones a las que me voy a referir tienen que ver con la situación económica, los procesos democráticos y la realidad del movimiento sindical.

En cuanto a la situación económica, creo que está claro que el principal problema es el de la deuda externa, y es donde además estamos en condiciones de sacar conclusiones y algunas ideas. Es algo que ha sido ya opinión de grandes sectores de nuestro pueblo, es decir, no solamente el movimiento sindical dice que la deuda externa es el principal problema de nuestros países, también esto ha sido opinión de nuestro gobierno. Incluso hay una frase de una reunión de gobierno donde se dice "... la deuda representa un retroceso de la economía de nuestros países y en consecuencia empeora la calidad de vida de nuestros pueblos ...". Se habla incluso de una década perdida, y esto es una de las formas más gráficas de señalar las consecuencias de este fenómeno de la deuda externa: una década perdida.

Sobre el tema de la deuda externa, organizaría la intervención en lo que tiene que ver con los protagonistas de la misma; es decir el gobierno como deudores, los acreedores y en particular, el papel de los sindicatos sobre este tema. Sobre el tema de los gobiernos, sería importante ver cuál ha sido la forma en que se han organizado y las actitudes que han ido desarrollando nuestros propios gobiernos.

Desde la óptica de los países deudores de América Latina se ha podido apreciar un tímido avance en sus planteamientos, aunque ello siempre se da dentro de los márgenes establecidos por los acreedores. Se parte de la declaración de Quito (enero del 84) en la que se caracterizó la deuda como el problema económico y social más grave del siglo, y que demanda soluciones urgentes, con responsabilidad de la Comunidad Internacional y exige plazos, periodos de gracia, tasas de interés compatibles con la recuperación de crecimiento económico de la región. Consta que América Latina se ha transformado en una exportadora neta de capitales. En ella participaron 30 países de América Latina y el Caribe.

En el mes de junio del mismo año, mediante una reunión ministerial se conforma en Colombia el Consejo de Cartagena. Dicho grupo está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Méjico, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela y Colombia.

En sus múltiples reuniones ha evolucionado a partir de la declaración de Quito. Lo más destacable se podría sintetizar en tres puntos:

a.- el problema de la deuda no es sólo financiero sino que tiene claras implicaciones de carácter político.

b.- las negociaciones sobre la deuda son de responsabilidad de cada país y no del club de deudores.

c.- reconsiderar el plan Baker como un paso adelante pero insuficiente.

Esas eran las fundamentales conclusiones que se abordaban en esa reunión.

En noviembre del 87 se conforma en Acapulco el grupo de los OCHO que incluyó a los Jefes de Estado de Argentina, Colombia, Panamá, Uruguay, Brasil, Méjico, Perú y Venezuela. Este grupo nació firmando el compromiso de Acapulco por la paz, el desarrollo y la democracia. En lo que respecta a la deuda externa reclama que es necesario revertir la transferencia masiva de recursos financieros hacia el exterior, y limitar el servicio de la deuda para lo cual se proponían las medidas siguientes:

1.- mecanismos que permitan que los países de la región se beneficien de los descuentos del valor de las respectivas deudas de mercado.

2.- compensar fluctuaciones de variables como las tasas de interés

3.- Mayores recursos para los organismos financieros internacionales, revisar las políticas del FMI, estimular un papel activo del Banco Mundial, desvincular los créditos de la Banca comercial de los acuerdos del FMI y el Banco Mundial. También se planteaba la reducción del capital en un 35%, la reducción de la tasa de interés al 6.5 fijo, extender nuevos créditos por el equivalente al 25% de los actuales. Se mantenían las opciones de capitalización de la deuda por 1000 millones a los largo de tres años.

Y aquí venía uno de los aspectos que ya ahora empiezan a ser determinantes que era que los acuerdos se vayan estipulando país por país, incluyendo ajustes estructurales; que es la política que se está siguiendo ahora; a través de los cuales se intentan superar las dificultades que enfrentan los países subdesarrollados. De esta manera se cambia un problema financiero insoluble, por la aceptación de políticas económicas que aseguren la mejor penetración de las empresas transnacionales en nuestros países. Básicamente esa ha sido la actuación de los gobiernos de nuestros pueblos.

Sobre el tema de los acreedores, su propuesta ha ido cambiando en este proceso. Todos los planes elaborados por los países acreedores tienen como condición para su aplicación que los gobiernos de los países deudores acepten las políticas de ajuste que impone el FMI. En este sentido, son inaceptables pues no tienen ninguna posibilidad de llevar a nuestro país al desarrollo, ni siquiera al crecimiento de la producción. Las políticas de ajuste han sido un verdadero fracaso en todos los países donde se

aplicaron. Un fracaso desde el punto de vista de nuestros pueblos. Aunque no desde el punto de vista de los bancos que lograron con ellas que los pueblos del tercer mundo se transformaran en exportadores de capital y que se empobrecieran más, para que ellos se apropiaran de los fondos y disminuyeran sus contradicciones económicas o financieras, sus transformaciones tecnológicas. La conversión de la deuda externa en capital es un intento de los acreedores de apropiarse de las fábricas, minas, tierras y, particularmente, empresas estatales de nuestros países, lo cual impone una mayor desnacionalización y enajenación del patrimonio nacional. Implica por tanto una pérdida de soberanía y amenaza recolonizar nuestros países. El fracaso del plan Baker es ahora continuado por el plan Brady; éste no significa ninguna solución, plantea proponer a los bancos acreedores un menú de opciones para que ellos elijan las que más le conviene. La decisión última será realizada por cada uno de los bancos. Una opción es la reducción de la deuda, pero esta reducción es anterior a la devaluación que ya tienen estos títulos de deuda externa en los mercados secundarios. Otra opción, es la de reducir el interés, el cual quedaría en un nivel superior al del momento en el que se contrajo la mayoría de las deudas, además esa tasa se aplicaría sobre el valor nominal de la deuda cuando ya sus valores de mercado son muy inferiores.

No puede catalogarse esta actitud sino como una forma de colonialismo, en la que la deuda externa es una herramienta para mantener el dominio sobre el tercer mundo. Los nuevos planes, como el Brady, ofrece dinero fresco, nuevos préstamos, como una trampa para acentuar nuestra situación de dependencia. Por eso debe ser rechazado por los pueblos en defensa de nuestro desarrollo, por la independencia de nuestros países.

Pero para no extendernos más sobre esto, y entrar en el punto sobre la deuda que más nos interesa y que es la actitud de los sindicatos, aquí también ha habido avances que nosotros trataremos de sintetizar.

Los sindicatos son el sector de opinión en donde se han logrado mayores avances en la consideración conjunta del problema de la deuda. Para ilustrar esto, es conveniente recordar tres instancias fundamentales:

1.- La Conferencia de Cuemavaca, convocada en agosto del 84. En ella se reclamó al FMI mejores condiciones para el reembolso de la deuda y un mayor apoyo a los países endeudados. A estos últimos se les indicó tratar de presentar objetivos de negociaciones comunes sobre el temario de las negociaciones de la deuda y los programas del FMI.

2.- La Conferencia de La Habana en julio del 85. Se explica la crisis de la deuda en un orden económico internacional injusto. Se condena al FMI como responsable de los intereses de la banca acreedora; se reclama la formación de un frente único de los países deudores de América Latina y el Caribe. La mayoría de los participantes se pronunció por la anulación

de la deuda, aunque algunos se manifestaron partidarios de moratorias, suspensión inmediata de pagos o postergación de los mismos por un número determinado de años.

3.- La Conferencia de Campinas, convocada con cen-

trales sindicales no afiliadas a ninguna internacional: CUT, CGT de Brasil, COB, CUT de Colombia, PIT-CNT de Uruguay. Esto fue en mayo del 87. Se enjuicia la deuda como la manifestación más destacada de la explotación imperialista, se la considera ilegal, se denuncia la capitalización de la deuda como un mecanismo ideado por los acreedores para cobrarla. La conferencia se pronuncia claramente contra el pago de la deuda.

Y aquí voy a hacer referencia a algo que me parece muy importante. Y es la manera en que cada una de nuestras organizaciones sindicales trasladó este problema de la deuda externa a los trabajadores y el pueblo en general. Porque no basta con hacer declaraciones en eventos internacionales, sino que es imprescindible concienciar a nuestros pueblos sobre lo que significa la deuda y disponerlos a enfrentar luchas que necesariamente vamos a tener que desencadenar para revertir ese proceso. Creemos que en ese sentido, un aspecto fundamental es que los sindicatos hagan una propuesta a la población y se la presenten al gobierno acerca del cómo podríamos nosotros revertir muchos de los problemas que tenemos en nuestros países si se evitara el pago de la deuda u otras alternativas como se han planteado en distintos eventos.

Nuestra Central Sindical, propuso en el 85 la suspensión del pago de 250 millones de dólares por un año, y aplicar esos fondos emergentes a los siguientes fines:

- 72 millones para el mejoramiento de 300 mil pasivos que cobran por debajo del mínimo nacional
- 42 millones para la recuperación salarial de 175 mil empleados públicos
- 40 millones para subsidio al precio del pan, la leche, la carne
- 2 millones para cancelar las deudas de los pequeños productores rurales con la Banca
- 50 millones para reforzar las asignaciones presupuestarias para la educación, la salud y la vivienda
- 10 millones a reactivar la agro-industria para que absorba los excedentes de la producción hortícola, frutícola, etc.

Si se hubiera aceptado y reiterado la propuesta del PIT-CNT en el periodo 85-89, se habrían ahorrado en nuestro país 1.000 millones de dólares volcados al desarrollo económico y al mejoramiento de la calidad de vida de los uruguayos. Por cierto, esto no se aplicó, pero significó una bandera de lucha y un elemento concreto para que, por supuesto, los trabajadores y el pueblo en general vieran el tema de la deuda mucho más ubicado en la realidad, y no solamente como una consigna, que creo, es el error que cometemos al transformarlo exclusivamente en un elemento de discusión genérica, y no trasladarlo a lo que significaría como solución a la necesidad de nuestro pueblo. Por cierto, además contemplábamos en este planteamiento a otras organizaciones que existen y a otros sectores de la sociedad, como por ejemplo los productores rurales, los pequeños comerciantes, etc. que deben ser necesariamente aliados y nosotros debemos buscar esas alianzas para enfrentar ese problema.

Finalmente, como propuesta y resumen de esto que desarrollé, una frase que se aprobó en la Comisión Transitoria Coordinadora contra el Pago de la Deuda Externa, y que dice lo siguiente: "Los factores analizados anterior-

mente, tales como pago de deuda de intereses, fuga de capitales, manipulaciones en los precios realizados por las empresas transnacionales, pérdidas en los términos de intercambio y otros mecanismos, provocaron que excedentes de nuestros países sean apropiados por los países desarrollados. La cifra transferida hacia estos países por estos mecanismos, es muy superior al total de la deuda externa. Esta ya fue pagada en exceso. No debe pagarse nuevamente, debe ser cancelada. Y como propuesta para alcanzar los objetivos anteriores es necesario lograr urgentemente el nuevo orden económico internacional. Y las propuestas alternativas que hacen del pueblo el centro de la actividad de desarrollo deben tener los siguientes objetivos: erradicar la pobreza masiva, conseguir el desarrollo autosostenido, conseguir la integración económica regional, satisfacer la necesidad básica del pueblo, es decir, educación, salud, alimentación, vivienda, electricidad y transporte; crear y generar empleo y lograr el desarrollo de los recursos humanos, control nacional y soberanía en la explotación de los recursos naturales, uso racional de los recursos naturales de los países, inclusive el procesamiento de materias primas antes de ser exportadas, respeto a los derechos humanos y democráticos de los pueblos, justicia social, económica y política, reducir los gastos de armamentos dando prioridad a los gastos de sectores sociales y productivos de la sociedad. Como conclusiones, buscar formas de acción y de organización unitaria para impulsar el programa de acción siguiente:

- profundizar el debate sobre la deuda externa de tal manera de hacer realidad la propuesta de no pago
- multiplicar las acciones y movilizaciones de los trabajadores e incentivar las prácticas de educación y popularización del problema de la deuda, haciendo que el tema se integre definitivamente a las luchas cotidianas y a las reivindicaciones de los trabajadores, resguardando siempre las singularidades históricas de cada pueblo y país
- promover contactos e iniciativas con los trabajadores y organizaciones sindicales y sectores progresistas de los países acreedores, buscando de esta manera ampliar el apoyo internacional y las solidaridades de los trabajadores y organizaciones no gubernamentales de los países del norte
- fortalecer la coordinación, solidaridad, integración y unidad de los trabajadores de los países del tercer mundo, buscando estrechar la cooperación Sur-Sur
- intensificar las relaciones entre las organizaciones sindicales de América Latina, el Caribe, África y Asia
- exigir la participación de los trabajadores organizados sindicalmente en los foros internacionales donde se discute el futuro de la deuda, denunciando también la nueva modalidad de cobro por ser todas contrarias a los intereses de la clase trabajadora
- solicitar la realización de una Conferencia Sindical Mundial sobre los problemas de la deuda externa de los países del tercer mundo con la participación activa de las Centrales Sindicales mundiales, CMT, FSM, CIOLS, en su convocatoria y preparación".

Por último, en cuanto a este tema, creo que debe ser una política nuestra la de favorecer acciones centrales o de cada sindicato, es decir, por un lado la política que tiene que ver con las Centrales, establecer reuniones y ac-

ciones a nivel de las centrales, pero también lo que tenga que ver con la relación entre Sindicatos, y esto es una experiencia que nosotros tenemos en nuestro país, donde sindicatos de rama han logrado integrarse a propuestas y acciones comunes.

Y finalmente, remarcar lo importante, aunque a veces parece lejano, de poder coordinar acciones. Creo que nos hemos acostumbrado a hacer reuniones que luego más allá de declaraciones son muy pocas las acciones comunes que logramos coordinar. Sin embargo, existen antecedentes, estas propias comisiones que se han planteado a nivel internacional han conseguido organizar y llegar a consenso en algunas acciones, debemos profundizarlas; pero además tenemos las experiencias regionales, por ejemplo, junto con los compañeros de CUT y CGT hemos podido realizar acciones, como cuando se quiso establecer el contacto entre Las Malvinas a partir del gobierno inglés, acciones que desarrollamos los sindicatos lograron evitar este tipo de situaciones y, creo que son antecedentes importantes para que nosotros vayamos intentando permanentemente consolidar y establecer acciones concretas para avanzar en estos temas. ■

VENEZUELA

Interviene: José Gregorio Ibarra
Sindicato: C.U.T.V.

VENEZUELA

CAPITAL	CARACAS
SUPERFICIE EN KM ²	912.050
● Demografía	
POBLACION TOTAL	19.25 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.8 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	36 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	48.114
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	2.499
TASA DE INFLACION	81 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL DOLARES)	34.8
GASTOS EN EDUCACION	5.4 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	1.0 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	13.1 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	64.1 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	26.5 POR 100

POSIBLEMENTE Venezuela suene mucho como país petrolero. Nuestra situación es, quizás, de cierto privilegio, somos un país andino- caribeño por una gracia geográfica, tenemos una parte que responde al área caribeña y otra que corresponde a la sierra andina.

Tenemos una población de unos 20 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente 5 millones han llegado a nuestro país de otras fronteras. Prácticamente nuestra población natural es de 15 millones de habitantes.

De acuerdo con las informaciones oficiales, Venezuela durante las tres últimas décadas aparece como un país de una cierta estabilidad social, política y económica en la región o en el continente. Sin embargo con los datos que vamos a ver a continuación, no oficiales, veremos que las cosas no son tan claras como las informaciones oficiales señalan.

Tenemos una población activa de alrededor de 6 millones y medio, con un índice de desempleo del 14%, aunque las estadísticas oficiales dan un 10% porque incluyen entre la población activa a la economía informal. Como se sabe, la economía informal no debe entrar en las estadísticas de empleo, por cuanto son, fundamentalmente, individualidades que no reciben ningún tipo de asistencia social. Lo que nosotros denominamos en casi todos los países el trabajo de "buhonería", que son las personas que adquieren algún dinero y compran y vender mercancías; no dependen de ningún patrón, ni reciben ninguna prestación de servicio social, de ayuda. Sin embargo las estadísticas oficiales incluyen a la economía informal, para no aparecer con millón y medio de desempleados, que es lo que significa el 14%.

Es un índice evidentemente alto, sobre todo en un país petrolero como el nuestro. Además con el señuelo de la estabilidad democrática y de país petrolero, se atrae a la inmigración formal e informal.

Otros datos importantes sobre la estabilidad de nuestro país es que el 12% de la población controla las riquezas del país. Un 30% de los venezolanos obtienen ingresos de sobrevivencia, existe un 56% que está en un estado de pobreza crítica, y un 30% pasa hambre.

Desde el punto de vista sindical, no porque lo queramos los trabajadores, sino que situaciones de carácter político han obligado a ello, existen cuatro organizaciones sindicales. Eso se debe,

fundamentalmente, a que en estas tres últimas décadas el poder se ha ido alternando entre dos tendencias: los social-cristiano y los social-demócratas. Se han turnado durante 30 años en el poder, y eso quizás ha traído como consecuencia la división en el seno del movimiento sindical, y la conformación de cuatro centrales sindicales.

Aunque numéricamente no cuadre, dos tendencias políticas con cuatro organizaciones sindicales; tenemos que decir que de las cuatro, hay una que responde a las posiciones socialdemócratas y es la central mayoritaria. Después esta la nuestra, la Central Unitaria de Trabajadores, que se le dá una connotación de socialista. Luego hay otras dos centrales más pequeñas que tienen connotaciones socialcristianas.

La primera Central, la que controla la social-democracia, es mayoritaria porque en ella están militando las organizaciones del sector público. Entendiendo que la social-democracia ha tenido mayor acceso al poder político, es decir ha tenido la Presidencia del país en cuatro periodos, tiene mayor control de las organizaciones del sector público. Los social-cristianos, sin embargo, tienen menos peso en los empleados públicos.

La militancia de la CUTV está en el sector privado, en la producción, en la industria; tenemos algunas organizaciones en el sector público pero en menor proporción que la de la central mayoritaria. ■

NICARAGUA

Interviene: Rene Bonilla Gamboa y Salvador Ramírez
Sindicato: C.S.T.

NICARAGUA

CAPITAL	MANAGUA
SUPERFICIE EN KM ²	130.000
● Demografía	
POBLACION TOTAL	3.75 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	3.4 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	62 POR 1.000
● Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	2.908
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	830
TASA DE INFLACION	1.174 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL. DOLARES)	7.570
GASTOS EN EDUCACION	6.2 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	38.7 POR 100 DEL PIB
● Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	13 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	51.1 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	8.4 POR 100

LO fundamental de estos 11 años de triunfo del movimiento revolucionario, de las Fuerzas Revolucionarias Nicaraguenses, es que se impactó, fundamentalmente, la propiedad de la tierra en las palancas macro-económicas; hubo una privatización fuerte de cerca del 60% del área industrial que pasó a manos de los trabajadores como propiedad del Estado.

Más del 65% de las tierras que estaban en manos de grandes terratenientes pasó a manos de pequeños y medianos productores y empresas estatales. Se nacionalizó la Banca, se nacionalizó el comercio exterior e interior, se dió un golpe a todas las transnacionales y las áreas fundamentales de las minas, madera, sector químico-industrial. Se avanzó fuertemente en algunos sectores importantes como la medicina, la salud, la educación, la vivienda.

Sin embargo, contra toda esa ofensiva revolucionaria, se constituyeron reacciones muy fuertes, apoyadas por toda la reacción internacional. Los daños que produjo la guerra tienen efectos regresivos de 36 años en la economía, si la midiéramos a precios constantes de periodos de mejor producción, como fue por ejemplo 1.978, es decir estamos hablando de un promedio de 500 a 600 mil dólares de exportaciones nacionales.

El enfrentamiento con la reacción internacional, a cuya cabeza estaba EE.UU., redujo gradualmente los niveles de vida y se profundizó a partir de 1.984 hasta 1.988.

En la etapa 80-84 se puede medir un fuerte crecimiento del producto interno bruto, de casi un 5%, y una política de inversión muy fuerte; como ejemplo basta decir que, cuando en América Latina el índice de promedio de inversiones estaba en el 12.5%, en Nicaragua era del 26%.

La guerra va a desarticular todo el sistema de dirección económica, va a reducir fuertemente el nivel de vida de la población, y la consecuencia es la derrota electoral en términos de una posibilidad que presente una alternativa de Gobierno que concluya la guerra. Eso va a motivar a la población nicaraguense a votar a la UNO.

A su ascenso al poder el gobierno parte de tres tesis fundamentales que pueden enfrentar al movimiento revolucionario, puesto que tiene recursos para ello. Tiene 250 mil dólares asegurados por la Unión Soviética, 350 mil dólares asegurados, supuestamente, en el encuentro con la CEE, el Club de París y la Convención de Roma. Parte

de la tesis de que las fuerzas revolucionarias van a quedar totalmente desmovilizadas después del voto electoral, y determina tres objetivos fundamentales.

El primer objetivo que se plantea en su primera fase va a ser el de terminar con la inflación, el segundo aspecto que tiene un poco de carácter psicológico, es que va a reducir fuertemente la inflación y propiciar de manera inmediata un ascenso de la actividad productiva basada fundamentalmente en los productos de agro-exportación como la madera, algodón, café y algunos productos industriales tradicionales y no tradicionales. El tercer elemento va a ser entrar de lleno a darle el papel protagonista al sector privado a partir de una transformación estructural que va a pasar necesariamente por devolver toda la propiedad privada, para ello va a desmontar toda la estructura jurídica que el Gobierno Revolucionario había establecido de manera precipitada en el periodo de transición, que va desde el 25 de febrero al 25 de abril.

¿Cuáles son los resultados hasta hoy de esos objetivos?, ¿cuáles son los resultados frente a las tesis planteadas?, ¿cómo reaccionan y qué se proponen las fuerzas revolucionarias?. Vamos a verlo a continuación.

Nosotros también aplicamos medidas ortodoxas, tipo fondo monetaristas, sólo aplicables en un proceso revolucionario, siempre y cuando se establezcan medidas que amortigüen ... según las alternativas y se tenga una intencionalidad revolucionaria. Por lo tanto nosotros extinguimos el crédito. Trataron de reactivarse los sectores fundamentales de la exportación, se trató de reubicar a la fuerza laboral para establecer mayor rentabilidad, sin embargo tenían que aplicarse medidas proteccionistas siempre con un carácter de financiamiento estatal sobre el gasto público, a la educación, a los servicios de salud, a los proyectos de alimentación nacional y, por supuesto, a la agroexportación.

Llegamos a tener en el año 88 un crecimiento de precios y una inflación del 33.654% más alta, histórica, aún más que Israel. En 1988 que se comienzan a aplicar las medidas económicas se pasa del 33.000 al 1.689. La UNO, lleva en sus cien primeros días de gobierno, una inflación del 55% mensual y acumulada del 7600%, mientras que sus costos de producción están sobre el 850% actualmente; eso explica un crecimiento tremendo del índice del precio al consumidor, al sector estatal se le aplica una indemnización mensual del 34%, sin embargo el índice de precios va por el 74%. El salario industrial promedio de es aproximadamente 51 dólares, en cambio la canasta de consumo básica ha pasado a tener un costo real de 150 dólares.

El gobierno de la UNO ha emitido una serie de leyes que golpean a los trabajadores, que violan incluso los convenios internacionales de la OIT; ha limitado la libertad sindical poniendo en manos del juez del trabajo la competencia de determinar quién es legal y quien no para otorgar la personería jurídica a un Sindicato. Con esta artimaña están reteniendo legalizaciones de nuestros Sindicatos y acelerando la constitución de los suyos.

El derecho de huelga está siendo limitado. Se debe establecer en primer lugar el consenso para que sea lícita, y en segundo lugar es el Tribunal de Arbitrio quien determina si la huelga es legal o no; además de eso quedan limitadas en el tiempo, al cabo de un mes la huelga puede

continuar o no, según el arbitrio del Ministerio de Trabajo.

En cuanto a la estabilidad laboral, se han vuelto a restituir los art. 116 y 119 del código del trabajo, desconociendo la propia Constitución. Por otro lado suspende totalmente la facultad que tienen los trabajadores del estado a tener su negociación colectiva y a determinar su estabilidad laboral. Se abolió la Ley llamada del Servicio Civil y se recurrió a un artículo del código del trabajo que establece que en el gobierno, igual que en la industria, todo trabajador de confianza puede ser despedido en cualquier momento rompiendo su contratación en cualquier momento. Esto fue la causa de la primera Huelga Nacional, porque categorizaron a todos los trabajadores como "personal de confianza" dejándolos en la mayor indefensión, sin poder recurrir a ninguna autoridad competente que mediara ni al Tribunal de Instancia de Apelación.

Este enfrentamiento condujo necesariamente a dos huelgas nacionales; la primera la desarrolló el estado (los empleados públicos), en la medida que se suspendieron sus garantías de estabilidad laboral y comenzaron a despedirlos. La segunda fue promovida por una violación de los acuerdos de la primera.

Mandamos al Gobierno de la UNO una plataforma que contenía 18 puntos, entre políticos, económicos y sociales. Fundamentalmente pedíamos créditos para los productores; la propiedad estatal, fuera urbana o rural, debía ser devuelta (no aceptando con ello el Decreto 1190 que devolvía al sector privado la propiedad estatal); salario mínimo discutido con la clase obrera, como se establece en el código del trabajo y en la Constitución, y discusión de un nuevo Código del Trabajo.

La Presidencia de la República no hizo caso, y escalamos una Huelga Nacional. Esta huelga nos dejó varias experiencias, y así en la segunda establecimos alianzas con sectores políticos, con sectores sindicales de ultra-izquierda, con los estudiantes y, sobre todo, con la población en general que estaba siendo golpeada por el aumento en las tarifas de la luz, del agua, del transporte.

Establecimos una política de alianza general con la que podíamos golpear desde el territorio hasta la fábrica, o podíamos sostener la huelga a partir de la alianza que nos daba el territorio. Hecho ésto, configuramos una "huelga activa" en vez de una "huelga técnica", probando nuestras fuerzas para saber si éstas eran reales o no. De tal manera que se fue aumentando en la huelga activa real, que sólo para golpear fuertemente se emplearía la huelga técnica.

El Gobierno se planteó a su vez golpearlos, desmontar el sistema de los revolucionarios. Entonces se tuvo que recurrir a las barricadas como mecanismo para desarticular al ejército y a la policía y que éstos no llegaran a las fábricas.

Durante esa huelga nunca se pretendió dar un golpe de estado o asumir el Gobierno, pero sí salir habiendo suscritos unos acuerdos con el actual gobierno. Estos acuerdos suspenden los artículos 1190 y 890 de la Ley de Servicio Civil, es decir las leyes fundamentales que pueden desmontar el movimiento de masas y que pueden poner en manos del sector privado la propiedad.

El Gobierno, por supuesto, quiere que lleguemos a una

concertación, pero una concertación en la que nosotros perdamos nuestra fuerza. A estas alturas tenemos el 80% de nuestra fuerza intacta, las fuerzas de la derecha tienen un 10%, y el 10% restante no está organizado.

Hemos reestructurado nuestro sistema organizativo, hemos realizado mejoras en los territorios nacionales y en los territorios con municipios de las propias ciudades, llegamos a toda la fuerza asalariada; coincidiendo y acumulando fuerzas con otros sectores que también son golpeados por el Gobierno. Pretendemos llegar a una concertación pero con toda la fuerza de nuestro lado, para así poder presionar sobre los acuerdos que nosotros queremos, fundamentalmente el mantenimiento de la estructura de la Constitución de la República, y no dejar que desmonten al sector agrícola, a la pequeña y mediana industria, que es la base social más fuerte con la que cuenta la Revolución y con la que podríamos contar para golpear al Gobierno.

El Gobierno recibe presiones desde la embajada de los EE.UU., y nosotros sin embargo estamos dispuestos a ir reactivando nuestras fuerzas, manteniendo una actividad organizada constante a través de huelgas por sectores, e ir revitalizando los sectores para llegar a la concertación con una fuerza muy activa, dispuesta y bien organizada, que nos permita poder imponer, entonces, el marco de negociación. ■

BRASIL

Interviene: Rogério Mamo Gouveira y Marlene Sanches Silva
Sindicato: C.U.T.

BRASIL

CAPITAL	BRASILIA
SUPERFICIE EN KM ²	8.511.965
○ Demografía	
POBLACION TOTAL	147.4 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.1 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	63 POR 1.000
○ Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	390.4
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	2.649
TASA DE INFLACION	1.759,2 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL. DOLARES)	111.1
GASTOS EN EDUCACION	4.5 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	0.4 POR 100 DEL PIB
○ Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	22.2 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	73.8 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	10.9 POR 100

BRASIL es el quinto país del mundo en extensión territorial y el sexto en población (141.400.000 habitantes) y figura entre los países más beneficiados en recursos naturales. Somos la 8ª economía del bloque capitalista y poseemos el 10% del PIB del mundo. Entre los años 40 y 70, Brasil creció a una media del 7% anual. Los años 80, 2%. Además está situado en un 52% PIB per cápita del mundo, igual que Senegal y por debajo de Malasia. Según el Banco Mundial, en el Brasil de 1.988 el 20% de los más pobres recibía apenas un 2% de la renta nacional, mientras que el 10% de los más ricos recibía el 50.6%.

Nuestro país es el 1er. exportador mundial de azúcar, café y soya; y el segundo en minería de hierro, el 3º en acero, el 8º en automóviles y material bélico. E importamos apenas el 6% del valor de nuestro PIB, lo que es considerado un índice excelente. La mitad de las viviendas posee luz eléctrica y el 70% dispone de agua potable. La red de alcantarillado beneficia al menos del 15% de las unidades habitacionales. El 52.8% de los trabajadores brasileños gana menos del doble del salario mínimo y solamente el 38.8% de los cargos son firmados por contrato. El salario mínimo brasileño es uno de los más bajos de América Latina.

De la población mayor de 15 años, el 20% está alfabetizado y sólo el 10% tiene estudios primarios. En educación, somos la 74ª nación del mundo, debajo de Tunes. El nivel educativo argentino es 7 veces mayor que el nuestro. 20 millones de brasileños no saben ni leer ni escribir. Nuestro consumo de papel periódico - utilizado por la ONU para medir el nivel cultural de un país - cayó de 2.270 kilos por habitante en 1.970, a 2.027 en 1.983, por debajo de Libia, de Mongolia, de Perú y de Bulgaria. El consumo norteamericano es de 45.675 kilos, 22 veces mayor que el de los brasileños. El índice de alfabetización en Brasil en 1.989 era semejante al de los Estados Unidos en 1.889. En nuestro país, sólo el 15% de los adolescentes frecuentan la escuela, mientras que en Vietnam el índice sube al 44%.

En 1.960 había en nuestro país 320 bancos privados; en 1.986, quedaban 46. En 1.989, la ganancia bruta de los ocho mayores bancos privados nacionales sumaba los 27 billones 400 millones de cruzeiros - equivalente al valor de todo lo que produjo el país aquel año -El 1.7% de las empresas públicas, privadas y multinacionales, monopoliza más de la mitad de todo el mercado industrial brasileño. Están bajo el control del ca-

pital privado monopólico y oligopólico las industrias automotriz, de higiene y limpieza, plásticos y caucho, de repuestos, bebida y tabaco, informática y distribución de petróleo y derivados.

En la zona rural, el 10% de propiedades tienen cerca del 79% del área total, hay unos 12 millones de trabajadores sin tierra y, entre 1.987 y 1.989, hubo 2.028 conflictos en el campo y fueron muertas 322 personas en la lucha por la tierra. En 1.989, 10 indios fueron asesinados, 57 fueron víctimas de violencia policial y 870 contrajeron epidemias propias de los blancos. Entre 1.984 y 1.989 fueron asesinados, solamente en Rio de Janeiro, 1.081 niños, de los cuales 894 murieron por armas de fuego.

Las políticas agrarias de las últimas décadas eran políticas de favorecimiento, teniendo como objetivo central el avance del capitalismo en el campo. La punta de lanza fue la revolución verde que propugna la utilización masiva de insumos modernos. La producción se volcaba hacia los productos de exportación con el objetivo de generar superávits en la balanza comercial. Con eso se concibió un modelo horizontalizado de producción agrícola, con enorme expansión del área.

Ese modelo comienza a adecuarse ahora a los objetivos del Plan Collor que contempla la liberalización del mercado, la internacionalización de la economía y la reducción de la participación del gobierno en los diferentes sectores de la economía.

De hecho, no se trata de un proyecto de política agrícola, pero alguna de las medidas tienen como fin cumplir con una etapa en el proceso de implantación del proyecto neoliberal del Gobierno Collor.

La estrategia del gobierno con ese paquete es el fortalecimiento del sector agroindustrial y la modernización del campo, promoviendo una integración cada vez mayor del sector agrícola con el sector industrial. En este sentido, las medidas adoptadas apuntan en la misma dirección (liberalización del mercado articulada con una participación efectiva, a nivel institucional, de la iniciativa privada, a través de los GEPS).

Es importante resaltar que en ningún momento el paquete hace referencia a los trabajadores rurales, aunque deja bien claro a quien interesan esas propuestas.

Los objetivos del paquete son:

- redireccionar el sistema productivo, intentando adecuarlo al libre mercado, fomentando a medio plazo la producción de excedentes comercializables.

- estimular la modernización del campo, a través de la utilización masiva de insumos modernos y la adopción de nuevas tecnologías.

- restringir al máximo la participación del Gobierno, a través de instrumentos de política agrícola (crédito rural, precio mínimo, etc.)

- fomentar la concentración de los factores de producción vigilando el crecimiento de las medias y grandes empresas rurales.

- reorganizar el trabajo en la agricultura, cualificando la mano de obra con el objetivo de atender la demanda de los complejos industriales.

- verticalización de la producción agrícola, intensifi-

cando más el capital y vigilando la competitividad de los productos agrícolas.

Con eso el gobierno entiende que estará rompiendo con el modelo de desarrollo agrícola adoptado a partir de la década de los 70, que tenía su base en la política de incentivos y subsidios.

Para esto el estado deberá avalar una política de libre mercado, ampliar la presencia del sector privado en la política de precios y de crédito y adecuar las reglas de importación y exportación.

No obstante, si observamos atentamente las principales medidas, reafirman el modelo anterior, con el agravante de propiciar una mayor concentración del capital y un desamparo mayor de los pequeños agricultores.

Las principales medidas adoptadas son:

- reducción de la tasa de interés del 12% al año al 9% anual; al 40% del valor de recursos ofertados por el Banco de Brasil. Esta medida atiende antiguas reivindicaciones de los empresarios rurales, no contemplando la propuesta de CUT que defiende tasas diferenciadas, de acuerdo con las características de los agricultores.

- reducción del 50% de las cuotas del impuesto de importación para fertilizantes, máquinas y equipos. Esa medida tiene el sentido de modernizar las fuerzas productivas, volviendo los productos del mercado interno más competitivos para contraponerlos al comercio internacional. Las condiciones actuales son favorables a los grandes productores que pueden capitalizarse aún más.

- reclasificación de los productores rurales, con el fin de la obtención del crédito rural; el gobierno no refiere la clasificación de los agricultores de acuerdo con los niveles de renta anual. Nuevamente los grandes serán favorecidos en el acceso al crédito aún mayor.

- política de garantía de precios mínimos (PGMP) que fue mantenida solamente para diez productos, siendo regionalizado. La intención del gobierno es salir a los pequeños mercados.

Existen varias medidas con efectos a medio plazo, que han de ser mejor analizadas. Obsérvese que algunas medidas básicas no están contempladas en el paquete:

- no hay ninguna regla de intervención del estado en el mercado

- no hay reglas para formación de stocks reguladores

- no hay definición en cuanto al seguro de producción

- no hay definición para una política de cultivo del trigo

Las principales consecuencias son:

- fortalecimiento del sector agroindustrial, que tendrá el papel de responder a las demandas del nuevo orden económico internacional

- refuerzo al proceso de concentración del capital en el campo, a través de la sustitución de los mecanismos tradicionales (incentivos y subsidios) por los GEPS

- empresariado rural, representado por la Confederación Nacional de Agricultura (CNA), Sociedad Rural Brasileña (SRB) y Organización de las Cooperativas Brasileñas (OCB), pasará a determinar la pauta y dirigir las reglas de la política agrícola.

- adopción de políticas compensatorias, con el objetivo de mantener a los pequeños agricultores en las actuales

condiciones, en función de ser un ejército de mano de obra reserva para los complejos agro-industriales.

- concentración aún mayor de la tierra para el favorecimiento de los sectores capitalizados, con aumento del éxodo y del subempleo en el medio rural.

Los desafíos para el movimiento sindical están en función de la reordenación del capital en el campo, buscando un aumento de los índices de competitividad, interesando apenas la producción verticalizada, es necesario profundizar en los estudios sobre las clases sociales en el campo, es preciso tener mayor claridad sobre cuáles son los actores presentes en el campo, en esta nueva cara del capitalismo.

Por otro lado, es necesario articular en el plano de lucha táctica una respuesta al actual gobierno, denunciando el carácter excluyente de ese plan y a quiénes se destinan sus objetivos.

La política industrial es uno de los éxitos básicos del proyecto neoliberal del gobierno Collor. El modelo pretendido se sustenta en dos puntos:

- a.- una redefinición del papel del estado en la economía, vía privatizaciones del patrimonio estatal, incorporando a la esfera privada agencias y empresas que históricamente ya intermediaban una acumulación privada,

- b.- una mayor inserción de la economía brasileña en la economía mundial, priorizando e internacionalizando la producción de los sectores modernos y una mayor exposición del mercado interno a la competencia internacional.

El diagnóstico del gobierno presupone que el estado es hoy responsable del atraso tecnológico del país y representa una traba para la modernización.

El nuevo papel del estado defendido por el gobierno es de garantizar la estabilidad macroeconómica coordinando las políticas públicas y sectoriales, eximiéndose, por tanto, de la intervención directa en la economía.

Entretanto, la ofensiva neoliberal va siendo emprendida justamente por los sectores que más se han beneficiado de la intervención del estado durante las últimas décadas. Los subsidios, las exenciones fiscales y crediticias y las intermediaciones oficiales de programas privados, ha sido la característica básica de relaciones entre el sector público y privado en Brasil.

El gobierno Collor no ha presentado todavía ninguna formulación más clara en el campo de la política industrial. Hasta este momento se ha limitado a anunciar las grandes líneas de reestructuración del circuito productivo. La principal meta es crear un ambiente económico en el que predomine la competitividad y el estímulo de capacidad tecnológica de la industria en los niveles de los países capitalistas avanzados. La viabilidad de esa meta se daría por medio de tres instrumentos básicos:

- a) el programa de competitividad industrial, centrado en la apertura y ampliación del comercio exterior.

- b) el programa brasileño de calidad y productividad, cambiando la definición de criterios, de patrones industriales y de mecanismos de estímulo en la incorporación de nuevas formas de organización industrial y de gestión del trabajo.

- c) desregulación del mercado, vía liberación de precios.

La adopción de esos instrumentos pasará por amplias negociaciones, comprometiéndose a los diversos sectores industriales. Eso deberá ocurrir a partir de los Grupos Ejecutivos de Política Sectorial (GEPS), encargados de detallar las metas propuestas. En el caso de las alteraciones pretendidas en la ley de informática, que posibilitarían la asociación de capitales nacionales y extranjeros (holdings) y una mayor apertura en la entrada de nuevas tecnologías, eso podría acarrear la pérdida de autonomía de la informática nacional en el campo de los softwares, dada la baja capacidad de competencia interna.

La revisión del código de propiedad industrial pretendido por el Gobierno, a su vez, se basa en el no reconocimiento de las patentes farmacéuticas, medida que atendería a los intereses de las multinacionales que ansían ingresar en el sector, respaldadas principalmente por el gobierno norteamericano. Caben aquí dos observaciones:

- prácticamente ningún país del tercer mundo que haya pasado por procesos de modernización recientes, posee legislación que reconozca las patentes farmacéuticas

- tal reconocimiento, antes de la conclusión de los trabajos del GATT - organización internacional que regula el comercio mundial - ciertamente disminuirá en mucho el poder de cambio de Brasil. La discusión de esas reformulaciones en el ámbito del GATT podría llevar, como contrapartida, revisión de barreras aduaneras y de prácticas proteccionistas de países del primer mundo.

El gobierno brasileño anuncia además la adopción de una legislación más rígida contra las prácticas de variación de precios forjadas por las multinacionales. La eficacia de esta medida es cuestionada a medida que tales empresas dispongan de mecanismos (contables, institucionales, etc.) que dificulten la caracterización de tales prácticas. Además los países más fuertes junto al GATT actúan de forma conjunta en las cuestiones conflictivas con los países más débiles económicamente.

El principal instrumento de estrategia del gobierno en el campo de la política industrial, hasta el momento, es el programa de reformulaciones en el campo del comercio exterior. Básicamente serán tomadas medidas de apertura de la economía, como:

- fin de cuotas cuantitativas y techos en los valores monetarios de importación antes limitados

- exención de tasas para importación de productos sin similar nacional

- reducción del índice de nacionalización de determinados productos con financiación pública

- relativo a las tarifas de importación, la meta es reducir la media actual del 37% al 20% entre 1.991 y 1.994, con el techo cayendo del 105% al 40% en el mismo periodo.

La señalización dada por el gobierno en ese área se relaciona, primeramente, con las presiones ejercidas por USA, Japon y CEE, en cuanto a las restricciones brasileñas a las importaciones. Inmediatamente después del anuncio de medidas liberalizadoras por parte de Brasil, USA retirará la prohibición que mantenían para la importación de 90 productos brasileños. Se relaciona también con la promesa de negociación, en bases más favorables, de la deuda externa.

En el plano interno, el gobierno espera, con la liberiza-

ción de las importaciones, controlar a corto plazo las presiones alcistas sobre los precios de productos como cemento, textiles, etc. Se trata, por tanto, de un programa que refuerza la internacionalización como uno de los ejes del proyecto neoliberal.

Un elemento vital para el programa de comercio exterior es la cuestión cambiaria. Si persiste la apreciación del dólar ocurrida en los primeros meses del Plan Collor, las importaciones continuarán inhibidas. Si el gobierno, al contrario, camina por la apreciación del cruzeiro, podrá comprometer a las reservas internacionales a generar una crisis cambiaria que, en el límite, lleve a la desorganización inflacionaria.

A corto plazo, la revalorización del cruzeiro frente al dólar estimulará, principalmente, las importaciones de bienes de consumo en detrimento de las importaciones destinadas a la industria. En el caso de la industria que, generalmente, se vale de financiaciones externas para importaciones, la busca de préstamos en dólares probablemente encontraría la negativa de los bancos acreedores, sobre todo si consideramos la actual moratoria brasileña.

Es importante resaltar que la experiencia argentina de los años 70, de liberalización de las importaciones como principal instrumento de política industrial agravó aún más la desorganización del circuito productivo y acentuó la escalada inflacionaria y recesiva del país.

El Gobierno Collor, después del fracaso de su plan de estabilización económica, viene adoptando una política ortodoxa y recesiva en una tentativa de contener el aumento de la inflación, principalmente por medio de restricciones monetarias, crediticias y salariales. Los indicadores de producción industrial, de ventas del comercio, de desempleo y los niveles de renta, ya configuran un cuadro recesivo.

La liberalización del comercio exterior como base de la política industrial en el presente escenario puede representar la fragilidad de sectores industriales que no tienen capacidad de concurrencia con los productos importados. La tendencia mayor es que eso ocurra en sectores cuyo poder productivo y tecnológico estaba desfasado en relación a las economías del primer mundo.

Por otro lado, la exposición de las empresas instaladas con ese tipo de concurrencia externa, además en un período recesivo, puede llevarlas a adoptar planes de racionalización de la producción (cambios organizativos del proceso del trabajo, con introducción puntual de nuevos equipos) que acaben por comprometer además los niveles de empleo y de condiciones de trabajo (intensificando los ritmos de trabajo). La experiencia de la recesión de 1.981/83 refuerza esa posibilidad.

La formulación de escenarios para la política industrial del gobierno Collor presenta algunas dificultades de orden político y económico.

En el campo político, es preciso considerar que la política industrial toma decisiones amplias y a largo plazo, que requieren un horizonte mínimo de estabilidad política y de sustentación orgánica al proyecto del gobierno. Los recientes desarreglos que viene enfrentando con el Congreso y el poder judicial, y la relativa pérdida de credibilidad en algunos sectores, dificultan hasta el momento la articulación de importantes sectores dominantes. La re-

sistencia y la oposición de sectores organizados de la sociedad también actúan en el sentido de aumentar las dificultades políticas del gobierno.

Entre tanto, la táctica del gobierno de llevar a los principales sectores industriales en la pormenorización del plan de política industrial, revela la intención de ampliar la base de apoyo político al proyecto neoliberal, y, al mismo tiempo, aislar a los sectores de oposición de la sociedad brasileña. Ante esta nueva ofensiva política del gobierno, las elecciones de octubre serán decisivas para los desdoblamientos del plan de política industrial.

En el campo económico, las complicaciones resultan de la inestabilidad económica. La recesión podrá anular los efectos de una política industrial ante una brutal restricción monetaria, crediticia y de corte drástico de las inversiones públicas, que impedirían la expansión y la modernización de la economía brasileña.

Por otro lado, la recesión tiende a actuar a medio plazo como alimentadora de la inflación, debido principalmente a la estructura productiva oligopolizada. La persistencia de presiones inflacionarias se coloca como principal factor inhibitor de políticas de ajuste estructural, en particular en el área industrial.

Para el movimiento sindical, el proyecto de política industrial introduce un conjunto potencial de dificultades. Por un lado, porque su adopción podrá llevar la difusión de nuevas tecnologías y de nuevas formas de gestión del trabajo, y que llevaría a redefiniciones importantes no sólo en las condiciones de trabajo y de renta de los trabajadores, sino también en el propio perfil de la clase trabajadora y en las relaciones políticas en los centros de trabajo y en la sociedad. Por otro lado, porque tal política forma parte del proyecto neoliberal que inspira el modelo de modernización del gobierno Collor, que es radicalmente distinto de los intereses de los trabajadores, que apunta para el crecimiento y la modernización vía distribución de renta y mejores condiciones de vida y trabajo.

En cuanto al funcionamiento sindical y sobre todo en el tema de negociación colectiva, hay que dejar claro que tanto el contrato colectivo como la organización sindical permanente, con funciones objetivas, en los locales de trabajo, son instrumentos capaces de encaminar una superación en la estructura de las relaciones laborales vigentes, fortaleciendo así el poder de acción de los sindicatos.

La extensa legislación consolidada, basada en el contrato individual y en los acuerdos colectivos anuales deja muy poco para la negociación sindical, sometiendo la casi totalidad de las conquistas de los trabajadores a la criba del Congreso Nacional. Es la legislación quien define quién, qué, cómo y cuándo negociar. El estado está presente en las relaciones de trabajo a través del legislativo (CLT), Ejecutivo (MTB) y Judicial (Justicia de Trabajo). El resultado a lo largo de los años, es de pérdidas salariales constantes y una práctica sindical de "correr siempre detrás del perjuicio".

Frente a este cuadro y proyectándose sobre las innovaciones que vienen siendo impuestas por el actual gobierno, generando crisis y desempleo, es notoria la necesidad que el movimiento sindical tiene de modernizar sus relaciones para así, sustentar a la clase trabajadora y obtener resultados favorables a ella. Sin embargo, esto tiene que

darse como proyecto y, mientras tanto, es necesaria una discusión más detallada sobre el contrato colectivo y la organización sindical.

Con esto no se trabaja en una idea de desprecio por la ley, pues es sabido que la propuesta de los trabajadores no es de "todo o nada". No obstante debe exigirse, conforme a los principios de libertad y autonomía, que las organizaciones sindicales puedan garantizar documentalmente sus conquistas, que se sobrepongan positivamente al contrato individual y tengan fuerza de ley para las partes involucradas.

La CUT no tiene un modelo definido del contrato colectivo. Compete al conjunto del movimiento sindical construir en la práctica este método para la superación del modelo de organización, negociación y contratación de corte corporativista impuesto hace 50 años por las clases dominantes.

Sin embargo, la importancia de esta discusión parece no afectar a los dirigentes sindicales que han dejado la cuestión bajo la guardia de sus asesores jurídicos. De esta forma la cuestión aún es considerada como insuficiente y no llega a las bases de la central de modo satisfactorio. Es preciso que los dirigentes se interesen por el asunto y esclarezcan sus categorías.

Si los trabajadores no tuvieran claros sus puntos de vista e intereses, no estarían preparados para oponerse a las modificaciones lanzadas por los proyectos neoliberales del gobierno Collor.

La Central Unica de Trabajadores convoca a todo el movimiento sindical, a los movimientos populares y al pueblo en general para una campaña de lucha contra las medidas económicas recesivas y de rigor salarial autoritariamente impuestas por el Gobierno.

Bajo el pretexto de frenar la inflación el Gobierno hace un paquete económico que restringe los salarios, aumenta el desempleo, y secuestra las economías de millares de pequeños ahorradores, violentando la democracia y desorganizando la economía. La inflación no acaba y lo que está en vigor es un modelo económico ortodoxo, de inspiración neoliberal, basado en el recetario del FMI.

La recesión y el rigor salarial son el alma de la política económica de Collor. El salario mínimo es el más bajo en la historia del país, las pensiones y jubilaciones son comprimidas y el desempleo afecta a más de un millón de trabajadores sólo en Sao Paulo. La reducción de la producción alcanza límites intolerables y la cuestión de la tierra continúa sin solución. En cuanto a la violencia, continúa en las ciudades y en el campo. Sin embargo los precios continúan subiendo, mientras los grandes industriales y banqueros acumulan ganancias fantásticas.

Avanzando en la política de privatización y desmoronamiento del Estado, más de 200 mil empleados públicos fueron dimitidos o colocados a disposición, recortes violentos fueron realizados en las parcelas destinadas a sectores esenciales, ocasionando la degradación de los ya precarios servicios de salud, educación, energía, transporte, comunicaciones, abastecimiento y saneamiento. Las empresas públicas son desmanteladas para que puedan ser subastadas o vendidas a precios bajos, en un proceso de privatización que atenta contra el patrimonio del pueblo brasileño.

En ese cuadro, gobierno y clase dominante manipulan los medios de comunicación, procurando rebajar la resistencia de los que están afectados por sus medidas. Para eso montan una farsa ante la opinión pública, alegando que la inflación cero o declinante justificaría sacrificios temporales. Por eso, las huelgas y movilizaciones son perjudiciales, impropias e inconsecuentes. Para la CUT esas luchas son legítimas y representan exactamente el vigor y la capacidad de resistencia de la clase trabajadora.

El momento actual registra un aumento de tensión social, con explosión de conflictos en el campo y en la ciudad. Las ocupaciones de tierra se intensifican y las huelgas se prolongan en duración. Por otro lado, la patronal se radicaliza, el Congreso se muestra remiso y connivente, en cuanto al Judicial, se adhiere a la ilegalidad inaugurada por Collor.

Como consecuencia, las huelgas de la Ford, de la CNS y de los eléctricos, los episodios del Pontal de Paranapanema y de los sin tierra en Porto Alegre, revelan que esa política apunta hacia la continuidad y el profundizamiento del cuadro de inflación, bajos salarios y ampliación de miseria. Eso aumenta el desafío del movimiento sindical. Es preciso combatir esa política actuando en varios frentes y en todos los niveles.

La CUT como Central comprometida con los intereses inmediatos e históricos de los trabajadores, lucha contra el rigor salarial y en defensa del empleo, atacando las medidas de punta de la política económica de Collor, pero no puede quedarse sola en eso. Los intereses de otros sectores populares y de los trabajadores no organizados, también afectados por el proyecto Collor, serán defendidos por el movimiento sindical.

En ese proceso, combinaremos nuevos y antiguos métodos de lucha. La huelga general continúa, por tanto, en el orden del día. Precisamos ampliar nuestras luchas superando los límites de las categorías y regiones, en un proceso de unificación nacional de las luchas.

La CUT va a desarrollar inmediatamente un plan de luchas implicando al conjunto de los trabajadores para enfrentar de forma global y nacional el proyecto Collor, con el objetivo de dar un giro a los enormes perjuicios que el mismo está imponiendo a los trabajadores, y así:

- derrotar el plan de contención salarial, desempleo, privatizaciones y política industrial del Gobierno Collor

- crear una nueva plataforma de acción sindical que permita a la CUT enfrentar un nuevo periodo de lucha de clases en el país, combinando la resistencia a la política neoliberal del gobierno con la construcción de alternativas a ese proyecto que sean hegemónicas en el campo popular y que creen condiciones para un enfrentamiento global con los sectores conservadores, en el plano de acción directa y de acción institucional.

- acotar, en la contienda electoral en curso, el campo de los intereses de los trabajadores, sus banderas y sus luchas.

La recesión, el desempleo, el brutal ataque a los salarios y una política salarial recesiva, la privatización y desnacionalización del patrimonio público, el desmantelamiento de los servicios públicos esenciales para la atención de las necesidades de la población y el autoritarismo y la violencia conforman el carácter antipopular, antina-

cional y antidemocrático del gobierno que la CUT viene denunciando desde la presentación del llamado Plan Collor en Marzo del 90.

La dinámica de la coyuntura actual exige un salto cualitativo de acción sindical de la CUT para una adecuada defensa e implementación de los derechos de los trabajadores.

Es preciso transformar toda experiencia de lucha y organización que acumulamos en nuestros sindicatos, en una experiencia de "campana salarial" de la clase trabajadora, impulsando la solidaridad de clase y una cultura de acciones unitarias e intersindicales. Solamente con esa trayectoria estaremos creando las bases para, a partir de huelgas sectoriales, ir hacia la huelga general nacional.

Es preciso intensificar las experiencias de luchas nacionales articuladas, afirmando la representación y dirección de clase de la CUT. Es preciso, también, avanzar en la propaganda del Convenio Colectivo Nacional y de la huelga general para su concreción, organizando a los trabajadores para garantizar sus conquistas y consolidando la CUT.

Considerando eso, la Plenaria Nacional de la CUT aprobó la realización de una campaña salarial nacional para todos los trabajadores de la base de la CUT, y articulada con todos los sectores populares y democráticos organizados de la sociedad civil.

El desarrollo de esta campaña prevé la realización de una huelga general nacional como instrumento para la conquista de las reivindicaciones y protesta política contra el gobierno Collor.

En este sentido, el objetivo central de la campaña es viabilizar un enfrentamiento global y nacional de los toques salariales, recesión, desempleo, privatización, violencia y autoritarismo impuesto por el gobierno, a través de una plataforma nacional de reivindicaciones, calendario de movilizaciones, negociaciones y formas de lucha unificadas y centralizadas nacionalmente.

La Plataforma de reivindicaciones que presenta la CUT es:

- reposición de las pérdidas salariales
- política salarial con reajuste mensual de inflación integral para todos los sectores, incluso funcionarios, pensionistas y trabajadores rurales.
- aumento real de los salarios y salario mínimo
- estabilidad en el empleo y seguro de desempleo
- jornada máxima de 40 horas semanales
- no privatización de las empresas estatales y saneamiento controlado por los trabajadores
- mejora de los servicios públicos y valorización de los funcionarios
- readmisión de los despedidos
- reforma agraria controlada por los trabajadores, asentamiento de los campesinos y política agraria
- garantía del libre ejercicio sindical a partir del local de trabajo
- convenio colectivo de trabajo
- no pago de la deuda externa. ■

COLOMBIA

Interviene: Janeth Corredor Castro y Eduardo Cala Florez

Sindicato: C.U.T.

COLOMBIA

CAPITAL	BOGOTA
SUPERFICIE EN KM ²	1.138.914
○ Demografía	
POBLACION TOTAL	31.19 MILLONES
CRECIMIENTO ANUAL	2.1 POR 100
MORTALIDAD INFANTIL	46 POR 1.000
○ Economía	
PIB EN MILES DE MILLONES DE DOLARES	38.861
PIB POR HABITANTE EN DOLARES	1.240
TASA DE INFLACION	26.1 POR 100
DEUDA EXTERNA (MILES MILL.DOLARES)	17.0
GASTOS EN EDUCACION	2.7 POR 100 DEL PIB
GASTOS EN DEFENSA	1.0 POR 100 DEL PIB
○ Prestaciones sociales	
ANALFABETISMO	11.9 POR 100
ESCOLARIZACION 12-17 AÑOS	70 POR 100
ESCOLARIZACION TERCER GRADO	13.9 POR 100

PARA hablar del problema sindical de nuestro país hay necesidad de hacer un marco muy breve sobre la situación política, porque de todas maneras el movimiento sindical se desarrolla dentro de ese marco. Es bueno que se sepa en qué momento estamos. Apenas hace un mes cambiamos de gobierno, gobierno elegido popularmente y con elementos que es buenos destacar, porque se piensa que Colombia vive un sistema democrático pleno.

El gobierno se elige democráticamente, el Parlamento opera, el Poder Judicial opera, los Sindicatos, la Prensa, o sea, todo lo que es propio de una sociedad civilizada y democrática opera en nuestro país. Pero todo ello de manera formal, porque desde hace cerca de cuarenta años estamos prácticamente en "estado de sitio".

Tenemos una Constitución que está por reformarse, aunque según la propaganda de la clase dirigente es que tiene tal solidez, que lleva 100 años de vigencia

Con todo ésto se dice y se entiende que nuestra democracia es una de las más sólidas de América Latina, pero nuestro país tiene estas características de manera formal, porque al menos en el cuatrienio pasado se dió contra el movimiento popular, el proceso más salvaje que hayamos vivido en las últimas décadas.

Cerca de 430 dirigentes de la Central Unitaria, que apenas tiene tres años de fundada, fueron eliminados violentamente. Sin contar, desde luego, con las masacres, los genocidios de zonas grandes, donde la influencia del movimiento popular es grande. Por ejemplo en la zona bananera, la zona más importante donde se ha desarrollado la agro-industria, los dirigentes sindicales han sido sometidos a exterminio. Esto parece un poco paradójico si tenemos la referencia de que vivimos en una democracia bastante sólida, pero esto hay que verlo desde los dos ángulos: el que se exporta y el que vive realmente el pueblo colombiano.

La violencia se vive a todos los niveles, desde la violencia de los terratenientes por el dominio y la distribución de la tierra. Esta distribución es totalmente desigual, a pesar de que ha habido una reforma agraria, pero los terratenientes han hecho sus respectivas contrarreformas y con eso, la reforma como tal, ha quedado un poco en el papel.

En el país se dió en el cuatrienio pasado un fenómeno que no es ajeno, pero que hizo mucha presencia en ese momento, que fue la aparición

de los grupos paramilitares y los grupos llamados de auto-defensa, que en el fondo son como dos elementos igualmente utilizados para ejercer la violencia contra la base social del movimiento popular. Estos grupos despertaron, y siguen despertando, una gran discusión frente al problema de la violencia sistematizada y selectiva que se da.

Se sabe que como producto de un proceso de tregua del movimiento armado, en el país surgió un partido político (la Unión Patriótica), cuyos principales dirigentes fueron eliminados, entre ellos dos de sus presidentes, dos candidatos presidenciales, los compañeros Jaime Pardo y Bernardo Jaramillo. Esto muestra el marco en el cual nos movemos, o sea la oposición es eliminada físicamente y se saca a la Unión Patriótica, por ejemplo, del proceso electoral a tiros.

En ese marco se mueve el movimiento sindical, que aunque tiene unas garantías formales, toda esta legislación de sección, todo el marco de violencia en el cual se mueve, hace que el movimiento sindical se desarrolle con muchísima dificultad.

En el caso particular de los trabajadores del Estado (magisterio, poder judicial, administración pública en general) no hay derechos ni garantías sindicales, no hay derecho a la negociación colectiva, no hay derecho a huelga. Esto hace presumir que las garantías sindicales y la participación del movimiento sindical en la vida nacional es muy débil, justamente por la carencia de una protección legal efectiva.

En el sector privado, aunque la huelga es legal, se ilegalizan y se reprimen, entonces se nota el debilitamiento de la acción sindical. Hace pocos meses, una de las huelgas más importantes de un centro carbonífero muy representativo, que tiene mucho peso económico en el país, fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, con la anuencia del Presidente de la República. Entonces el derecho constitucional de la huelga quedó cercenado, y la huelga fue obligada a levantar a los 10 días.

El movimiento sindical y el movimiento popular estuvo en los últimos tiempos en una actividad difícil, porque el problema de la violencia hizo que dirigiéramos todas nuestras baterías, toda nuestra energía pesada hacia la reivindicación del Derecho a la Vida. Esto se convirtió en la bandera central del movimiento sindical, para hacer frente a lo que se denominó la "guerra sucia", o sea, la eliminación física de los dirigentes sindicales y de los activistas. Esta fue el arma que utilizó la patronal, los empresarios para redimir el conflicto laboral. De esto el sector de los cementeros, el sector bananero, el sector agro-industrial, fueron las principales víctimas.

Mientras el movimiento sindical se dedicaba a la lucha por el Derecho a la Vida, la gran burguesía con todo el dominio ideológico, político y económico que tiene, fue dirigiendo sus esfuerzos hacia el desmantelamiento de empresas impulsando el proceso de privatización.

Por otro lado, la patronal dirigió sus esfuerzos al debilitamiento del movimiento sindical. Según estadísticas oficiales se determina que sólo el 10% de la fuerza laboral de nuestro país está organizada. De eso el 80% está en la Central Unitaria de Trabajadores. Otro de los elementos que cuentan para el debilitamiento sindical es lo que nosotros llamamos "la informalidad de la relación laboral"

de los trabajadores. No hay contratos de trabajo, no hay prestación, no hay Seguridad Social; esto ha creado un tipo de trabajador que no tiene derecho a asociarse, porque en definitiva no está conceptualizado como trabajador.

Tenemos ya algunas empresas donde el trabajador de planta de nómina, es minoritario y por lo tanto, los Sindicatos también son minoritarios. Estos fenómenos explican el por qué es muy valerosa la lucha del movimiento sindical colombiano, pero también porque es tan débil su peso político. Y a pesar de las crisis internas que son producto de su estructura, de la lucha política e ideológica, la división se está superando aunque tiene un lastre que pesa todavía mucho y hace que el movimiento sindical se desarrolle en condiciones precarias.

Por todo ello una de las banderas del movimiento político, del movimiento sindical, de los trabajadores en su conjunto, es desde luego la lucha por la democracia; es decir de qué manera nosotros tenemos que impulsar los procesos de democratización de la vida nacional, la democratización de la relación laboral, el que los convenios de la OIT tengan una vigencia. Nosotros luchamos para que el Estado y esa sociedad tan antidemocrática tengan una oxigenación. Por eso es entonces la lucha que se está dando por la Constituyente, por las grandes reformas políticas que desde luego no nos van a resolver el problema, pero sí van a civilizar en cierta medida las costumbres políticas, van a civilizar la relación laboral de nuestro país.

Esta es una de nuestras principales banderas, además de ir contra la privatización, contra los reajustes y el reacomodo del gran capital del país.

Ahora vamos a tocar dos aspectos que parecen importantes: uno centrándonos en lo que es la política actual del gobierno que, fundamentalmente, se desarrolla en la aplicación del modelo de apertura económica y sus consecuencias, y otro el problema de la Asamblea y la Reforma Constitucional.

En cuanto a la apertura económica en Colombia, es la aplicación del modelo neoliberal, producto de las imposiciones que el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial hacen al país como condiciones para otorgar nuevos créditos al gobierno colombiano. Esa apertura económica contempla por un lado la apertura en el comercio exterior, es decir, que se abran las fronteras del país y se de ingreso libre y sin condiciones a los productos internacionales que, obviamente, pensamos lleva como consecuencia mayor intervención del capital extranjero en Colombia, principalmente del capital imperialista y que obviamente para nosotros es un problema de soberanía nacional, mayor monopolización del capital de modo que los grandes monopolios extranjeros van a ir a competir con la industria nacional que se encuentra en un estado de no desarrollo, de no tecnificación, etc. y eso va a generar la destrucción de la escasa industria que existe. Por otra parte se habla en Colombia de un estado no interventor, es decir que la política de apertura económica implica la privatización de todas las entidades que se encuentran en este momento en manos del Estado, que se va a entregar al capital privado las entidades que son más rentables de las que maneja el gobierno, y se las entregan bajo el sustento de que el Estado no es un Administrador, de que el Estado no va a intervenir en la economía, que en él priman las fuerzas del mercado de libre comercio y bajo ese

pretexto se entregan al capital privado, que entre otras cosas, es capital privado internacional como ya ha sucedido en la empresa de Telecomunicaciones, en la Banca y en algunas otras empresas.

De otra parte la apertura económica implica también una reforma total a la actual legislación laboral. El gobierno dice ya que una apertura económica requiere una flexibilidad laboral, y ésta es interpretada como una regulación de todo el mercado laboral a través de una modificación de lo que hoy está establecido para los trabajadores en la parte colectiva y en la parte individual del trabajo. Es decir, la eliminación de las garantías sindicales, la restricción del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la poca estabilidad que existe para los trabajadores en Colombia; acabar con los fueros sindicales como garantía para poder hacer un recorte sustancial en la parte fundamental de los derechos que hoy tenemos.

En cuanto al proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, es un debate que se está dando ahora de forma intensa, es casi el eje de la coyuntura política en nuestro país.

El pueblo reclama reformas desde hace muchos años, cambios de fondo; se pronunció mayoritariamente para que se estableciera una reforma constitucional (con más de cinco millones de votos), que se hiciera una Asamblea Constituyente que trabajara para modificar o cambiar la Constitución y que se diera un proceso democrático, autónomo y soberano para establecer una nueva Constitución en el país.

Esta voluntad popular fue burlada por el gobierno. Se hace un acuerdo entre varios partidos: el Partido Liberal y el Partido Conservador con su facción social-conservadora, el Gobierno y la Alianza Democrática M-19. Se firmó un acuerdo que limita las posibilidades del pueblo colombiano para hacer unas reformas a la actual Constitución, firmándose un acuerdo de fondo donde se limitan los temarios.

Es decir, la Asamblea Constituyente no podrá tocar puntos diferentes a los ya firmados en el acuerdo, y estos son los puntos de retoque del modelo administrativo del estado, aspectos sobre la justicia, sobre la parte institucional, sobre lo jurídico, etc., pero los grandes problemas económicos, políticos y sociales no se tocan y se impide que sean temas de discusión en la Asamblea Nacional Constituyente.

También se limita la elección de los constituyentes, se plantea que sean 70 y que se elijan a través de un sistema de elección que lo más seguro es que quede en manos de los partidos tradicionales. Obviamente esto llevaría a que se desconozca la voluntad popular de cambio en nuestro país.

Es conocida la participación de las principales organizaciones sociales, de las organizaciones de masas en ese proceso constituyente, y pensamos que como están las cosas, si no se da una verdadera movilización de masas, si no se organiza la protesta del pueblo colombiano en contra de ese proyecto, se va a convertir en una frustración más, y en una posibilidad de que la burguesía y el pueblo colombiano reacomoden todas sus instituciones y fortalezcan un poco más la supuesta democracia que existe en nuestro país.

Pero se queda en el tintero algo que parece que es el producto de exportación, el peso que ha tenido el narcotráfico en toda la vida política y social del país. El narcotráfico ha posibilitado, desde luego, que con semejantes cantidades de dinero que mueve, muchas industrias se vean boyantes. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que en los últimos años ha mostrado un crecimiento económico favorable. Esto explica por qué durante la última década, la burguesía, la clase dirigente del país, sustentó y usufructuó semejantes capitales. Desde luego la bandera que ahora imponen los norteamericanos es la lucha contra el narcotráfico, pero que tiene su doble moral en el fondo.

Profundizando en este aspecto que ha sido producto de exportación de la burguesía y de los medios de información a nivel internacional, tenemos que decir que el narcotráfico se ha venido caracterizando como un fenómeno que tiende a consolidarse en los diferentes aspectos con un carácter de empresa multinacional, en lo que tiene que ver con el manejo, cultivo, producción, exportación, control de los medios de producción y de tener una incidencia en los diferentes países andinos.

El problema del narcotráfico en Colombia tiene una particularidad y es que ha convivido con la burguesía tradicional. La burguesía tradicional es la burguesía naciente, emergente de la economía subterránea. Durante décadas han partido el pastel de las ganancias, ha sido el colchón que ha permitido que la crisis económica a nivel mundial no vaya a fondo, como se ha dado en otros países del Cono Sur.

Sólo cuando ese poder económico y el narcotráfico comienzan a disputar el control político a la burguesía por un lado, y por otro la exigencia del imperialismo de combatir el narcotráfico por el problema económico, fundamentalmente de divisas, que se crea en el interior de EE.UU., es cuando supuestamente se plantea una guerra al narcotráfico.

Unido a eso, a la necesidad del estado de fortalecer a nivel jurídico y a nivel de represión los diferentes estamentos para reprimir los movimientos sociales en la lucha por un cambio en el país, y también tiene que ver con la política de los conflictos de baja intensidad del imperialismo, implementar en el área, fundamentalmente, la doctrina de seguridad nacional en el que vienen adoptando medidas represivas, supuestamente para combatir el narcotráfico, y que se ha venido consolidando tanto a nivel de la justicia como a nivel de accionar contra insurgentes una serie de medidas que van encaminadas directamente a golpear a los sectores populares o a los sectores obreros, y no a combatir directamente el narcotráfico.

Esto es una síntesis general de como la burguesía, el gobierno colombiano, bajo la supuesta lucha contra el narcotráfico viene asumiendo un papel contra las organizaciones populares y sindicales, que incide en el desarrollo de las formas organizativas a nivel de los sectores sociales, tanto campesino como indígena o sindical. □

Traducción y Edición: Secretaría de Relaciones Internacionales
Confederación Sindical de Comisiones Obreras
Fernández de la Hoz, 12 - 28010 MADRID